EQUILIBRIO DE PODERES Y LIBERTAD EN MONTESQUIEU. UNA MIRADA A LA TENTATIVA DE ASIGNACIÓN DE STATUS POLÍTICO A LOS PARAMILITARES DURANTE LOS PROCESOS DE DESMOVILIZACIÓN EN COLOMBIA. PERÍODO 2002-2010

NICOLÁS DAVID ATARA GAVIRIA

UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO
FACULTAD DE CIENCIA POLÍTICA Y GOBIERNO
BOGOTÁ, D.C. 2014

“Equilibrio de poderes y libertad en Montesquieu. Una mirada a la tentativa de asignación de status político a los paramilitares durante los procesos de desmovilización en Colombia. Periodo 2002-2010”

Monografía
Presentada como requisito parcial para optar por el título de
Politólogo
En la Facultad de Ciencia Política y Gobierno
Universidad Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario

Presentada por
Nicolás David Atara Gaviria

Dirigida por
Ivonne Marcela Rodríguez González

Semestre I, 2014

Hay un barco que no para de viajar por todos los océanos y mares del mundo. Sólo lo tripulan dos personas y una golondrina que lo acompaña. Pero el barco no viaja a la deriva, tiene una brújula que lo guía en su camino, lo saca de las tormentas y lo lleva siempre a casa. Tiene, además, un ancla, que no le falla, que lo mantiene firme cuando arrecian los vientos fuertes. Y viaje donde viaje, siempre estará seguro, pues a donde vaya la brújula y el ancla estarán ahí, en todos lados y siempre presentes, y la golondrina, siempre fiel, indicando con su vuelo que el hogar está próximo, ya sea en tierra o en el mar.

AGRADECIMIENTOS

A mi familia, por su sacrificio, entrega, fidelidad, apoyo, por hacer que todo sea posible. Una vida no alcanza para expresarlo y agradecerlo.

A Natalia, y las memorias de una historia interminable.

A Ivonne, por creer en una idea.

A los amigos que el paso por la Universidad me dejó, no por compartir una carrera, sino por hacer parte de mi vida.

A todos aquellos que de alguna manera influyeron para que hoy sea mejor que ayer, de quienes me llevo gratos recuerdos; no sé dónde estaré mañana junto a mis ilusiones, pero mirar hacia atrás y rememorar será efectivo para sonreír.

Gracias para siempre.

La libertad dijo un día a la ley: "Tú me estorbas"
La ley respondió a la libertad: "Yo te guardo".
Pitágoras

RESUMEN

La presente monografía propone retomar la teoría clásica de equilibrio de poderes y libertad de Montesquieu y examinar su vigencia. Para ello, como objetivo se buscó establecer de qué manera la tentativa de asignación de status político a los paramilitares, durante los procesos de desmovilización entre los años 2002 – 2010, afectó el equilibrio de poderes y la libertad política en Colombia en términos de Montesquieu. Se formula que, pese a un efectivo resguardo de la condición de equilibrio de poderes en el ámbito estatal, la existencia de determinados factores de orden social amenazó la libertad política de los ciudadanos por cuanto la misma se complementa con una condición de seguridad. Se encontró que los planteamientos del autor francés se aplican en sus términos más esenciales para efectuar análisis situacionales, independientemente de su dimensión temporal, algo propio de las teorías clásicas en las disciplinas académicas.

Palabras clave: *distribución social del poder, equilibrio de poderes, pesos y contrapesos, libertad, seguridad*

RÉSUMÉ

Cette monographie se propose de reprendre la théorie classique d´équilibre des pouvoirs et liberté de Montesquieu et examiner sa vigueur. L´objectif a cherché établir de quelle manière la tentative de assignation de statut politique aux paramilitaires pendant les processus de démobilisation entre les anneés 2002-2010, a affecté l´équilibre des pouvoirs et la liberté politique en Colombie dans le sens de Montesquieu. Il a été formulé que, malgré une effective défense de la condition d´équilibre de pouvoirs dans le domain estatal, l´existance de déterminés facteurs d´ordre social menace la liberté politique des citoyens en plus que la même se complète avec une condition de securité. Il est trouvé que les établissements de l´auteur français s´appliquent en ses limites plus essentiels pour faire analyses situationals, indépendamment de sa dimension temporel, quelque chose de propre des théories classiques dans les disciplines académiques.

Mots clés : *distribution social du pouvoir, équilibre de pouvoirs, poids et contrepoids, liberté, sécurité*

CONTENIDO

Pág.

INTRODUCCIÓN 13

1. DISTRIBUCIÓN SOCIAL DEL PODER. RELACIONES ENTRE LAS RAMAS EJECUTIVA Y LEGISLATIVA, Y LOS GRUPOS PARAMILITARES 16

1.1. El paramilitarismo en las regiones 17

1.2. Alteración del mapa electoral 20

1.3. Triunfo electoral del presidente Álvaro Uribe Vélez. Las elecciones del 2002 y 2006 22

1.4. Distribución social del poder, aproximación de intereses en ramas distintas del poder 24

2. PESOS Y CONTRAPESOS. TENTATVA DE CONCESIÓN DE INDULTOS A LOS PARAMILITARES Y LA ACCIÓN JURISDICCIONAL 27

2.1. Pacto de Ralito y Acuerdo de Ralito 29

2.2. Del acuerdo de Ralito a la Ley 975 de 2005: Ley de Justicia y Paz 31

2.3. Competencia jurisdiccional de la Corte Constitucional 36

2.4. Decreto 4436 de 2006 38

2.5. Competencia jurisdiccional de la Corte Suprema de Justicia 39

3. LA LIBERTAD EN COLOMBIA. UNA MIRADA A PARTIR DE LA TEORÍA DE CHARLES DE MONTESQUIEU 42

3.1. Una aproximación al proceso de desmovilización paramilitar. Algunas

cifras y dinámicas 43

3.2. Fenómenos similares, denominaciones distintas 45

3.3. Afectaciones a la vida 46

3.4. Afectaciones a la propiedad 49

3.5. Una mirada al cumplimiento de la ley 52

3.6. Una conclusión parcial a propósito de los factores que amenazarían la libertad política en Colombia en términos de Montesquieu 55

CONCLUSIONES 57

BIBLIOGRAFÍA

ANEXOS

LISTA DE GRÁFICOS Y TABLAS

Pág.

Tabla 1. Número de personas desplazadas departamentos de Bolívar, Córdoba y Sucre (2006–2010) 35

LISTA DE ANEXOS

Anexo 1. Modelo. Teoría de equilibrio de poderes y libertad según Charles de Montesquieu

Anexo 2. Documento. Teoría de equilibrio de poderes y libertad según Charles de Montesquieu

Anexo 3. Gráfica. Composición política Senado de la República 1998 – 2006

Anexo 4. Gráfica. Terceros partidos y movimientos en el Senado (1998-2002)

Anexo 5. Gráfica. Terceros partidos y movimiento en el Senado (2002-2006)

Anexo 6. Mapa. Presencia de los paramilitares en las regiones colombianas. 31 de diciembre de 2002

Anexo 7. Lista. Senadores y Representantes a la Cámara periodo 2006-2010 elegidos en zonas de influencia y control paramilitar

Anexo 8. Tabla. Cuadro de resumen parapolítica en el Senado, porcentaje de votos y curules involucradas

Anexo 9. Tabla. Cuadro de resumen parapolítica en la Cámara de Representantes involucrados por partido

Anexo. 10 Tabla. Número de procesos por parapolítica discriminados por departamento

Anexo. 11 Mapa. Presencia de los paramilitares en las regiones colombianas. 31 de diciembre de 2005

Anexo. 12 Lista. Paramilitares extraditados a EEUU (2008-2010)

Anexo. 13 Mapa. Municipios con actividades de Bacrim, 2008 y 2009

Anexo. 14. Tabla. Municipios con presencia y actividades de Bacrim por departamento y subregión (2009-2010)

Anexo. 15. Gráfico. Desplazamiento individual por actores, 2002-2009

Anexo. 16. Tabla. Número de líderes de DDHH asesinados entre 2007 y agosto de 2011. Clasificación por subregión

Anexo. 17. Tabla. Número de indígenas asesinados entre 2007 y agosto de 2011

Anexo. 18. Imágenes. Recortes periodísticos nexos Bacrim-políticos

LISTA DE SIGLAS

FFMM	Fuerzas Militares
EEUU	Estados Unidos de América
AUC	Autodefensas Unidas de Colombia
DDHH	Derechos Humanos
DIH	Derecho Internacional Humanitario
ACCU	Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá
Bacrim	Bandas criminales
MAPP-OEA	Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia de la Organización de Estados Americanos
FIDH	Federación Internacional de Derechos Humanos
CNRR	Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación
CNAI	Corporación Nuevo Arco Iris
IPC	Instituto Popular de Capacitación
HRW	Human Rights Watch
OACP	Oficina Alto Comisionado para la Paz

INTRODUCCIÓN

Los planteamientos clásicos guardan una característica que los determina: la vigencia a pesar del contexto y la época; pero revisarlos y discutirlos constituye una necesidad académica que posibilita producir nuevo conocimiento. En la Ciencia Política, como en otras disciplinas, el problema de la libertad es un tema ampliamente tratado teóricamente. Uno de los principales autores que ha desarrollado postulados sobre el particular es Charles de Montesquieu (pensador francés del siglo XVIII), cuya obra *Del Espíritu de las Leyes* ha trascendido académica y prácticamente. Lo allí planteado sirvió como fundamento para el pensamiento que daría como acontecimiento la Revolución Francesa de 1789, sólo por citar un ejemplo.

Es lo concerniente a la libertad política sobre la base de los aportes de este autor consignados en este libro el objeto de estudio de esta monografía. La esencia de la misma es revisar tres premisas principales, equivalentes al marco teórico: la distribución social del poder, el equilibrio entre los poderes, y la seguridad como condición de libertad, explorando la validez de unos principios que en la Ciencia Política han devenido en dogmas. (González 1972, citado por Ovalle 1982, pág. 182) Sobre la distribución social del poder, se aclara que el término es extraído del aporte de Fuentes (2011), cuya fuente original es el pensamiento de Montesquieu, el cual sintetiza. Para ello, es menester utilizar hechos prácticos que guarden efectos hoy día y, a partir de ellos, no sólo clarificar las premisas dadas, sino determinar su utilidad para efectuar análisis. Ahí radica el aporte de la presente a la Ciencia Política: servir como un ejemplo más para refutar o revalidar planteamientos clásicos.

El objetivo general consiste en establecer de qué manera el intento de asignación de status político a los paramilitares, durante los procesos de desmovilización en el periodo comprendido entre el 2002 y 2010, afectó el equilibrio de poderes y la libertad política en Colombia, a la luz del pensamiento de Montesquieu. El caso se consideró toda vez que ante la factibilidad del desequilibrio de poderes, especialmente en un régimen presidencialista como el colombiano, deba volverse a las fuentes principales donde se plantea la teoría para repasar y sopesar las consecuencias que supondría una situación de tal naturaleza.

El objetivo propuesto se desagregó en tres objetivos específicos, *i)* describir los mecanismos por los cuales se presentó, por parte de actores políticos y paramilitares, una influencia considerable en las ramas ejecutiva y legislativa del poder público en Colombia; e irá vinculado a la noción de *distribución social del poder* en Montesquieu como componente integral de la teoría de *equilibrio de poderes*; *ii)* analizar cómo la concesión de indultos a los paramilitares en la Ley de Justicia y Paz[1] motivó el accionar institucional de la rama judicial en virtud del principio de equilibrio de poderes, el cual responderá al segundo componente de la teoría de *equilibrio de poderes*: el mecanismo de *pesos y contrapesos*; finalmente, *iii)* establecer cómo, a pesar del equilibrio efectivo de los poderes públicos con respecto al asunto del status político de los paramilitares, la libertad política en sentido de Montesquieu se vio deteriorada, ligado a la condición propuesta por él, supeditada a la percepción de *seguridad*, para la existencia de la *libertad*.

Se guió según una hipótesis que propone que la distribución de dos de las ramas del Estado por parte de actores políticos y paramilitares posibilitó su utilización en función de intereses particulares, pero que, frente al uso inadecuado del poder que supuso la concesión de indultos a estos grupos paramilitares, el control institucional se superpuso en virtud del principio de equilibrio de poderes, a pesar de lo cual la existencia de fenómenos paralelos a la aplicación de la ley implicó un deterioro en la libertad política en sentido de Montesquieu.

Es imperativo mencionar que lo dicho representa un cambio sustancial al proyecto de trabajo de grado inicial dada la naturaleza misma de la actividad investigativa. De hecho, el objetivo general, los específicos y la hipótesis originarios fueron opuestos a lo que se obtuvo. Se tenía por supuesto que hubo un efectivo desequilibrio de los poderes en términos de Montesquieu bajo la asignación de status político, algo contradictorio con la realidad. Se encontró que fue justamente el principio de equilibrio de poderes lo que motivó la acción de la rama judicial para frenar la tentativa de asignación de status político a esos grupos armados ilegales pero que, pese a ello, las afectaciones tanto a la vida como a la propiedad y el incumplimiento de la ley representan una amenaza a la libertad política.

[1] Ley 975 o Ley de Justicia y Paz, dentro de la presente monografía se utilizarán ambas denominaciones de manera indistinta, y se enfocará en la misma en tanto es el marco legislativo principal para reincorporar a la sociedad a miembros de grupos armados al margen de la ley para que contribuyan a la consecución de la paz nacional.

Dicho de otra manera, el marco teórico sigue siendo pertinente para analizar fenómenos como el propuesto.

Adicionalmente, en el marco teórico del proyecto se tenían insertos algunos conceptos que, en virtud de depurar y delimitar los planteamientos teóricos más útiles no fueron retomados, por ejemplo, los conceptos de *República*, *gobierno despótico* o *miedo*.

Precísese que, pese a que pueda confundirse con la tipología de estudio de caso, se ajusta a la categoría de monografía, ya que no busca realizar un análisis de un caso específico, sino que pretende utilizar hechos reales como medio para el entendimiento de un marco teórico y la exploración de su vigencia. Asimismo, pese a alimentarse de algunos conceptos propios de la disciplina del Derecho, no pretende realizarse un análisis jurídico de los fenómenos, sino extraer las implicaciones políticas de los mismos.

Se usan métodos de investigación cualitativa al estudiarse relaciones sociales que no permiten medición exacta. Está dividida en tres capítulos, todos analíticos, vinculando unos hechos que sirven para la explicación del marco teórico propuesto. En particular, durante el tercer capítulo, en lo posible se utilizan datos y cifras posteriores al 2006 dado que es hasta este año cuando la mayoría de desmovilizaciones paramilitares ocurrieron; además, es fundamental mencionar que lo que se plantea no es la presentación de cifras sistemáticas, sino las pertinentes que sirvan para evidenciar la existencia de fenómenos vinculados con la seguridad. Las fuentes utilizadas son principalmente académicas, resaltándose también la utilización de investigaciones periodísticas, reportes oficiales e informes tanto de instituciones del Estado como de organizaciones de DDHH, sentencias y documentos de trabajo.

Se espera que la monografía propuesta sirva para la comprensión de una visión de libertad clásica que no sólo trata de limitar la acción del poder estatalmente organizado, sino que considere de manera permanente condiciones adicionales sobre las relaciones individuales en cada situación de la vida. También, que resalte la capacidad de algunos intelectuales de proponer teorías que no caduquen con el paso del tiempo en sus consideraciones más esenciales.

1. DISTRIBUCIÓN SOCIAL DEL PODER. RELACIONES ENTRE LAS RAMAS EJECUTIVA Y LEGISLATIVA, Y LOS GRUPOS PARAMILITARES

Establecer de qué manera los planteamientos de Charles de Montesquieu, en términos de elaboración constitucional y diseño institucional, influenciaron a los Estados liberales, debe llevar a la distribución del poder público en tres ramas (González 1972 citado por Ovalle 1982, pág. 182). Esta disposición orgánica estatal responde a una idea intrínseca a su pensamiento[2] dirigida a evitar la concentración absoluta del poder (Barreto-Rozo 2011, pág. 218) materializada a partir de mecanismos de control mutuos concebidos para contrarrestar los efectos de la mayor preocupación de la tradición liberal: el uso indiscriminado del poder en función de un interés particular en detrimento de los derechos de los individuos; dicho de otra manera, en detrimento de la libertad (García Macho 1986, pág. 175).

Empero, como lo señala la académica Claudia Fuentes (2011), los principios de distribución jurídica evidenciadas en las constituciones políticas se han privilegiado frente a lo que denomina *principio de distribución social* por un acusado anacronismo del mismo. Althusser (1968) y Eisenmann (1975) plantean que, en Montesquieu, el componente de distribución social del poder reflejaba la división estamentaria de la sociedad inglesa[3] por lo cual, debido a atinencias de orden histórico, este se ha visto subordinado al componente eminentemente jurídico (2011, pág. 47).

Fuentes propone reconsiderarlo y partiendo de la premisa de que la distribución social del poder no responde a estamentos concretos de un período particular, establece que el cumplimiento de este principio determina en buena parte la distribución jurídica constitucional de los Estados.

Para la autora, la distribución social del poder corresponde a la medida por la cual los poderes se encuentran en correspondencia con una serie de intereses definidos y, en cierta medida, opuestos, no necesariamente determinados por factores socioeconómicos

[2] Montesquieu las expresa de manera sistémica y especializada, aunque ya habían planteado ideas similares liberales como John Locke

[3] El poder ejecutivo debía ser ejercido por el Rey; el legislativo por los nobles y el pueblo; y el judicial, en razón de que los hombres debían ser juzgados por iguales, debía ejercerse por los nobles si de juzgar nobles se tratase, y por tribunales ordinarios cuando el sujeto fuera del pueblo. (Fuentes 2011, pág. 54)

sino basados en alguna afinidad particular. Esto se fundamenta al retomar a Montesquieu (1984) cuando explica que "todo estaría perdido si el mismo hombre, el mismo cuerpo de personas principales, de los nobles o del pueblo, ejerciera los tres poderes: el de hacer leyes, el de ejecutar las resoluciones públicas y el de juzgar los delitos o las diferencias entre particulares" (pág. 169). En consecuencia, se trata de que no esté acaparado el poder, al menos en buen volumen, por actores o sectores[4] con intereses particulares que puedan llegar a poner en riesgo la libertad de los ciudadanos.

Ahora, no es que Montesquieu de manera literal haya utilizado la expresión "distribución social del poder", sino que, con base en sus planteamientos, el término fue acuñado por Fuentes (2011) y se retoma al comprender la idea original.

Este capítulo se propone describir cómo grupos paramilitares y una serie de políticos determinaron cierta parte de la conformación de las ramas ejecutiva y la legislativa (especialmente) del poder público en Colombia[5]; o sea, pretende establecer cómo el componente de distribución social del poder en Montesquieu, parte integral del principio de división de poderes, se vio en alguna proporción asegurado por actores con intereses afines; siendo el primer paso para, posteriormente, analizar de qué manera utilizaron el poder en función beneficios propios.

1.1. El paramilitarismo en las regiones

Para poder vislumbrar algunas características generales de los paramilitares, sin querer reducir a una descripción limitada un fenómeno complejo como el nacimiento de estos grupos ilegales, se presenta un fragmento de una entrevista concedida por el exjefe paramilitar Carlos Castaño –fundador de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC)– en 1996. Señalaba lo siguiente con respecto a las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU):

> Es una organización contrainsurgente y aspiramos a que donde haya un frente guerrillero, haya un frente de autodefensa. Y como se van perfilando las cosas en este país, así va a ser. Porque cada día el Estado, a través de las fuerzas armadas se muestra más incapaz de

[4] Esta noción de poder y su uso indiscriminado no se reduce al individualismo, puede sectorial o grupalmente.
[5] Periodos 2002 – 2006, 2006 – 2010

> controlar ese avance de la guerrilla. Entonces nosotros tenemos que ir marchando paralelo a como se vaya perfilando nuestro enemigo. (Caicedo 1996, citado por Cubides 1997, pág. 16)

Pueden extraerse tres elementos de análisis; *i)* sus orígenes, entre otras cosas, conformados como instrumentos de respuesta a la presencia de las guerrillas en territorios manejados por ganaderos latifundistas y narcotraficantes, puesto que las fustigaciones para apropiarse de terrenos, ganado, y del negocio del tráfico de cocaína, merecían una acción inmediata (Valencia 2007a, pág. 21); *ii)* como pauta para su expansión, recorrían las rutas y caminos que se encontraban territorialmente bajo el mando de las guerrillas de las FARC, el ELN y, en un primer momento, el EPL, previo a su desmovilización (Verdad Abierta 2011a, párr. 1); *iii)* una limitada presencia estatal evidenciada a través de la relativa ausencia de las Fuerzas Militares [FFMM] en los territorios de surgimiento y consolidación de los grupos paramilitares[6].

No pretende desconocerse que, en su génesis, los paramilitares fueron grupos atomizados con dinámicas distintas entre sí. Estas generalidades, basadas en comunes acuerdos al respecto en la academia, son elementos que permiten entender su poder en las regiones en el campo político y electoral.

Durante el gobierno del presidente Ernesto Samper Pizano (1994-1998), por medio de una resolución de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada[7] se dio vida a las Cooperativas de Seguridad y Vigilancia, Convivir: cuerpos privados de civiles que podían usar armas privativas de las FFMM con regulación especial, incentivándose la formación de grupos irregulares descontroladamente. En lo territorial, el gobernador de Antioquia Álvaro Uribe Vélez (1995-1997) ha sido acusado por ser promotor de la conformación de estos grupos –según versiones de, entre otros, 'Don Berna' y alias 'Alberto Guerrero'– (Verdad Abierta 2011b, párr. 7, 35), lo cual contribuiría a su expansión[8]. Entre otras cosas, al concluir el respaldo normativo para los grupos de Convivir, estos fueron la principal fuente tanto de integrantes como de armas, asistiendo a

[6] Primordialmente las regiones del Urabá y el Magdalena Medio. (Semana 1995, citado por Cubides 1997, pág. 25)
[7] Resolución del 27 de abril de 1995.
[8] De ahí las declaraciones del exjefe paramilitar Salvatore Mancuso, donde afirma que en Colombia existe un "Paramilitarismo de Estado", pues según él, el Estado los instaba a armarse y facilitó , a través de las FFMM, su crecimiento y expansión. (Medina 2008)

acrecentar la situación. Resulta notable que el Estado era anuente al fenómeno del paramilitarismo dada la capacidad que mostraban para neutralizar a la guerrilla, combatiéndola y replegándola exitosamente.

Sumado a ello, las FFMM también veían con aprobación la existencia de grupos paramilitares, pues los primeros les delegaban la responsabilidad de brindar seguridad en buena parte del territorio, formando vínculos de cooperación contra la insurgencia guerrillera[9] (Semana 2007a).

Completando el cuadro, Salvatore Mancuso, jefe de las AUC, afirmó que empresarios y ganaderos, al ver la efectividad de su actividad antiguerrillera, los invitaban a recrear su modelo operativo en otras regiones del país (Martínez 2004, citada en Valencia 2007b, pág. 11). De ahí su aparición en la Costa Atlántica, los Santanderes, Arauca y Casanare. Los medios de financiación de los paramilitares para costear armas, hombres, instrumentos de comunicación, de movilización y, en general, para solventar su funcionamiento[10] provenían de ganaderos y empresarios, y, en su gran mayoría del negocio del narcotráfico. (Valencia 2007b, pág. 7).

A grandes rasgos, confluían intereses entre Estado, FFMM, narcotraficantes, ganaderos, empresarios, terratenientes y gobernantes locales que no sólo permitieron el nacimiento de los paramilitares, sino que también determinaron su expansión regional[11]. Esta disposición de fuerzas e influencias los dotaba de poder como factor indispensable para la comprensión de las consecuentes alteraciones en el mapa electoral del país. No es menos importante señalar que todo el proceso expansionista de los grupos paramilitares se desarrolló bajo dinámicas de sangre y fuego, siendo la población civil el actor más afectado por el conflicto.

1.2. Alteración del mapa electoral

[9] Otra razón para considerar a los paramilitares como aliados de las FFMM fue el exterminio de muchos de los militantes de la entonces Unión Patriótica en manos de estos grupos armados (Valencia 2007b, pág. 6)

[10] Según Vicente Castaño (2006): "Con la ayuda de ganaderos, comerciantes y campesinos de la zona [Antioquia] se consiguieron armas y hombres para avanzar militarmente contra el EPL que dominaba esa región" (pág. 4).

[11] Castaño (2006) afirmó que "[…] se conformó el grupo más disímil del mundo: militares retirados, ex guerrilleros, ganaderos, empresarios, comerciantes, arroceros, cacaoteros, cafeteros, palmeros, los cultivadores y transportadores, la clase media y las víctimas de la guerrilla, todos se orientaron en una sola causa. La autodefensa" (pág. 3)

Para entender por qué los paramilitares llegaron a influir en las ramas ejecutiva y legislativa del poder público se retomó a la Corporación Nuevo Arco Iris (CNAI), la cual en una investigación académica que relacionó las variables de paramilitarismo y política en los departamentos y que sirvió para impulsar investigaciones por parte de la rama judicial, concluyó que

> […] en una gran ola de expansión los paramilitares ganaron varias guerras y en ese proceso lograron modificar sustancialmente el mapa político en 12 departamentos, transformar parcialmente el de otros, establecer una gran bancada parlamentaria, influir en las elecciones presidenciales, capturar el poder local en diversas regiones del país y entrar en un proceso de negociación con el Estado. (Valencia 2007b, pág. 3)

Es peculiar que entre los políticos regionales que resultaban elegidos para las corporaciones legislativas, varios de ellos no contaban con suficiente trayectoria política[12]. Los mecanismos para ubicar candidatos en los cargos requeridos eran diversos; algunas alcaldías y gobernaciones contaron con candidatos únicos, pues los contendores renunciaban ante presiones de los grupos paramilitares. A la par de la expansión paramilitar, nuevos partidos y movimientos políticos nacían para "competir" por los cargos de elección popular[13].

Podría estimarse inevitable que el paramilitarismo permeara la política en algún grado. Según Hernán Gómez[14], Carlos Castaño alcanzó la madurez político militar cuando decía que no pensaba en propiedades sino en regiones; y que no tenía políticos subalternos, ya que cualquier político que resultara electo "tenía que tenerlo en cuenta" (Aranguren Molina 2001, pág. 40).

Para los investigadores, dos premisas habrían de evidenciarse para explicar el fenómeno: *i)* que los paramilitares debían necesariamente intervenir en la política nacional y

[12] Como ejemplo: Eleonora Pineda pasó de ser concejala de Tierralta (Córdoba) con 700 votos a ser representante con la mayor votación para esa corporación en 2002, más de 80.000 votos (Valencia 2007b, pág. 5).
[13] Colombia Democrática, Colombia Viva, Convergencia Ciudadana, Convergencia Popular Cívica, Movimiento de Renovación Acción Laboral, Moral, Movimiento de Integración Popular, Mipol, Equipo Colombia, Apertura Liberal, Si Colombia, Integración Regional, IR, Alas, Cambio Radical, Movimiento Nacional Conservador, Movimiento Nacional Progresista, Dejen Jugar al Moreno -antes movimiento Defensa Ciudadana- y sectores del liberalismo y el conservatismo (Valencia 2007b, pág. 4).
[14] Uno de sus formadores intelectuales y amigo cercano.

local de forma que en el futuro fueran posibles unas negociaciones de paz; *ii)* que las élites políticas de las regiones también recurrieron a los actores paramilitares para resistir los cambios democráticos que representarían las negociaciones con la guerrilla (Valencia 2007b, pág. 3).

Para 2002, un indicador de que la política en el ámbito electoral se estaba transformando fue que los dos grandes partidos tradicionales habían perdido las mayorías en el Congreso y las regiones mostraban una radiografía similar. Los grupos políticos conformados abrigaban a líderes que apenas incursionaban, o se convirtieron en refugio de algunos ya tradicionales que abandonaban sus partidos de origen. Pasó de tenerse para el Senado 38 curules obtenidas por partidos minoritarios, a 58 en el 2002 (de 102 del total) y, en la Cámara de Representantes, los pequeños partidos poseían un total de 91 curules (de un total de 166). Un importante número de parlamentarios habían sido elegidos bajo zonas de dominio paramilitar como Córdoba, Cesar, Magdalena, Sucre, Antioquia, con sus respectivas alianzas para Cámara de Representantes (Semana 2005).

En los gobiernos locales: gobernaciones, alcaldías municipales y concejos, los grupos y partidos nuevos que habían aparecido para las elecciones legislativas de 2002 se convirtieron en fuerzas importantes también regionalmente, asimismo en zonas de control paramilitar[15].

Es necesario comprender que el proceso de nacimiento y la progresiva expansión de los grupos paramilitares en diversas zonas del territorio colombiano, sumados a un interés de perpetuar el *statu quo* por parte de ganaderos, fuerzas políticas regionales, militares y el Estado, representaron drásticos cambios en el mapa electoral, configurando una bancada parlamentaria y presencia en gobiernos locales. Dicho de otra manera, el paramilitarismo permeó el cuerpo legislativo de la nación, así como también al ejecutivo territorial.

1.3. Triunfo electoral del presidente Álvaro Uribe Vélez. Las elecciones del 2002 y 2006

[15] Las nuevas fuerzas eligieron 251 alcaldes sumados los obtenidos por Colombia Viva, Sí Colombia, Convergencia Popular Cívica, Mipol, IR, Mpu, Alas, Moral, Colombia Democrática, Apertura Liberal, Cambio Radical, Convergencia Ciudadana, Equipo Colombia y Movimiento Nacional, y Movimiento Conservador Progresista. Mientras el Partido Liberal obtuvo 232 alcaldes y el Partido Conservador Colombiano 160. También eligieron una cifra cercana a los 4.000 concejales (Valencia 2007b, pág. 21).

El ejecutivo nacional no fue ajeno al proceso de inserción de los grupos paramilitares en la política. En el 2002 ocurrió un hecho inédito en la historia política de Colombia, "un candidato disidente del Partido Liberal derrotó al candidato oficial por un margen escandaloso de votos" (Valencia 2007b, pág. 15).

Se trataba de Álvaro Uribe,[16] sobre el cual pesan hoy día investigaciones judiciales por temas relacionados con paramilitarismo [17] (Semana 2014). De múltiples fuentes provienen acusaciones contra Uribe por haber fomentado la creación de las Convivir en territorio antioqueño. Una, se encontró en documentos de la multinacional Chiquita Brand entregadas al Departamento de Justicia de EEUU[18], donde Robert Thomas –abogado la firma– señala que "es bien conocido en el momento [1997] que oficiales de alto rango del ejército colombiano y el Gobernador del Departamento de Antioquia estaban haciendo campaña para el establecimiento de una organización Convivir de Urabá" (Evans 2011).

Otras provienen de Salvatore Mancuso. En declaraciones ante la justicia estadounidense posteriores a su extradición, refirió reuniones en propiedades de Uribe donde éste, como gobernador, le felicitaba por los trabajos que estaba llevando en la región al mando de su cooperativa de seguridad privada (Verdad Abierta 2012a, párr. 2). Arturo Salón alias 'JL' –ex jefe paramilitar– declaró ante un magistrado de Justicia y Paz que Uribe no sólo propendió por la formación de Convivir, sino que además solicitó que se entrenara y capacitara personal para las mismas nacionalmente (RCN radio 2012).

Adicionalmente, se encuentran documentos como la Resolución 42378/1996, en la que Uribe como gobernador reconoce personería jurídica a la Convivir "El Cóndor", que luego perpetuaría una masacre tras la quema de la finca Guacharacas, propiedad de la familia Uribe, donde se habría dado origen al Bloque Metro presente en Medellín (CNAI 2013). Así, las versiones de paramilitares a quienes se les ha iniciado procesos, y sobretodo investigaciones periodísticas de variadas fuentes, vinculan al hoy expresidente con las

[16] Abogado y político antioqueño. Se desempeñó entre otros cargos como alcalde de Medellín, gobernador de Antioquia y senador de la República.
[17] Para mayor profundidad sobre las declaraciones que han vinculado a Uribe Vélez con el paramilitarismo, ver: "Los ´paras´ que han salpicado a Álvaro Uribe", en el portal investigativo Verdad Abierta.
[18] A Chiquita Brand se le habían abierto procesos judiciales en Estados Unidos por vínculos con paramilitares en Colombia.

Cooperativas de Seguridad. La injerencia de estas en las dinámicas de expansión paramilitar ya se había establecido.

Ahora debe observarse cómo los paramilitares influyeron en la elección presidencial de Uribe Vélez en el 2002. Mancuso, en declaraciones desde una cárcel en Virginia (EE.UU) contó que en el año 2001 se realizó una reunión entre los cuales se había convocado, además de él, a líderes paramilitares como Carlos Castaño, Diego Fernando Murillo Bejarano alias 'Don Berna', y Carlos Mauricio García alias 'Doble Cero', para discutir la necesidad de apoyar a un "candidato con ideología afín a las autodefensas en temas como la seguridad y la lucha contra la subversión" (Verdad Abierta 2010a, párr. 5). El candidato elegido fue Uribe Vélez.

Jorge Iván Laverde Zapata, alias 'El Iguano' y José Bernardo Lozada Ortuz, alias 'Mauro'[19] contaron los detalles de la colaboración que dieron las autodefensas a la campaña política del entonces candidato a la presidencia, ante una Magistrada de Justicia y Paz; salió a la luz cómo los paramilitares del Norte de Santander hicieron un millonario aporte para la campaña a través de financiación y propaganda (Verdad Abierta 2012b, párr. 6). Luego de haberse reunido con cerca de 18 jefes locales de la campaña el apoyo, logísticamente, partió de la protección de las mesas de votación en zonas de presencia guerrillera, fiestas y asados para los campesinos con el fin de lograr su apoyo y, el día de las elecciones, con transportes y refrigerios. Según los testimonios, las votaciones en zonas rurales de los Santanderes, y Antioquia, se habían movilizado votantes sin precedentes.

Los congresistas investigados por parapolítica Eleonora Pineda y Miguel de la Espriella también confesaron que Uribe sí sabía de los aportes paramilitares a su campaña y que nunca se opuso, contrariamente a lo que respondía ante las acusaciones. Los paramilitares apoyaron financiando las visitas y los viajes que Álvaro Uribe realizaba en cada una de las regiones de fuerte presencia paramilitar, dentro del contexto de su campaña, preparando la logística y transportando a los votantes el día de los sufragios (Análisis 365 2012).

Uribe, del nuevo movimiento político Primero Colombia, venció en las urnas al candidato del Partido Liberal Horacio Serpa, con un total del 53% de los votos,

[19] Jefes del Bloque Catatumbo.

convirtiéndose en el primer presidente en ganar las elecciones en primera vuelta desde que se implementó en la Constitución Política de 1991. El Congreso –con un importante sector uribista– reformó la Constitución de forma que la reelección por un período de cuatro años más se permitiese.

En su gobierno pudo evidenciarse una conexión fuerte entre los organismos del Estado y los paramilitares; por citar un ejemplo, el hoy extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) debió pedir perdón por el asesinato del académico Alfredo Correa de Andreis ya que, bajo supuestas motivaciones por ser miembro de las FARC, hizo exhaustivos seguimientos a Correa informándole a los paramilitares sus movimientos, hecho que culminó con su muerte por parte de paramilitares. La Corte Suprema de Justicia condenaría posteriormente al director del DAS a 25 años de cárcel por ponerla al servicio de los paramilitares (El Tiempo 2013, párr. 3).

Otro acontecimiento diciente, usando el caso del DAS, fue la utilización del mismo para investigar, además, a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, especialmente por estar investigando el fenómeno conocido como "parapolítica", la alianza entre políticos y paramilitares (Semana 2009).

En esta dirección, los nexos con los paramilitares para la reelección también fueron sujeto de confesión. Mancuso desde EEUU explicó que le había entregado dinero a Jairo Andrés Angarita ('comandante Andrés') para que llevara la logística y trasladara civiles para votar y publicitar la reelección, efectiva en el 2006 (Caracol radio 2012).

1.4. Distribución social del poder, aproximación de intereses en ramas distintas del poder

Se había bosquejado que para propender por un cuidado del individuo y su libertad según Montesquieu los poderes debían estar claramente delimitados en sus funciones, puesto que "cuando el poder legislativo está unido al poder ejecutivo en la misma persona o en el mismo cuerpo, no hay libertad porque se puede temer que el monarca o el Senado promulguen leyes tiránicas para hacerlas cumplir tiránicamente" (1984, pág. 169). Al ser el hombre propenso a desarrollar actitudes excesivas en contra del ordenamiento,

concentrando bajo su dominio el poder, las instituciones deben procurar establecer frenos a la actividad del mandato.

Lo reseñado permite relacionar el proceso de expansión paramilitar, las Convivir, el beneplácito de Uribe como gobernador y una posible afinidad ideológica con el paramilitarismo, con la incidencia de estos grupos armados en las elecciones y una marcada influencia en las políticas y la legislación para con los paramilitares, acomodada a las pretensiones de estos últimos. De ahí que tanto la rama legislativa en Colombia como la ejecutiva se vieran permeados por actores provenientes de alianzas establecidas previamente entre paramilitares y políticos; sin excluir el ámbito de lo local y regional, donde dichas alianzas tuvieron alcances más sólidos.

Un importante señalamiento profirió Mancuso en una entrevista dada a Semana en la cual decía que las AUC tenían más del 30% de amigos en el Congreso de la República; Vicente Castaño, hermano de los fundadores de las ACCU, confirmó que ese número estaba por encima del 35% (Verdad Abierta 2005).

Con todo, puede concluirse parcialmente que el nacimiento y la expansión de los grupos paramilitares se dieron gracias al consentimiento de diversos actores con fuerza regional, y muy particularmente del Estado. Ello se presentó gracias a un interés de combatir a la insurgencia guerrillera en función de proteger amplios territorios controlados por ganaderos, o para mantener el monopolio sobre el negocio de la cocaína.

En etapas posteriores, el crecimiento del paramilitarismo en regiones del norte y oriente de Colombia permeó la política, toda vez que los paramilitares vislumbraban ventajoso entrar en un proceso de negociación con el Estado, a la par que los políticos regionales no consentían un potencial cambio en el *statu quo* propiciado por posibles negociaciones entre el Estado y las guerrillas.

Esta situación influiría determinantemente en el mapa político y electoral del país; los partidos políticos tradicionales verían disminuido su control sobre los gobiernos locales, y las mayorías en el Congreso. En contraste, nuevos movimientos y partidos adquirían poder político, emergían nuevos políticos y resultaban electos en zonas de control paramilitar gracias a dinámicas ilegales, como intimidación a candidatos y votantes, financiación irregular de campañas y propaganda. El Congreso se encontraría, en proporciones de bancada, afín a la actividad paramilitar y, el Presidente de la República

para el momento, también habría recibido ayuda paramilitar para ganar en las urnas, en hechos sin precedentes.

Las ramas ejecutiva y legislativa estaban conformadas, en una fracción importante, por designios convenidos de actores paramilitares en alianza con políticos comprometiendo, en un primer estadio, la división de los poderes por la distribución social del mismo, condición para evitar que los poderes estuviesen concentrados en actores vinculados por intereses cerrados.

La siguiente etapa analizará si el poder concentrado en actores afines efectivamente sería utilizado para llevar a cabo intereses particulares en detrimento de la constitución y las leyes. Se esclarecerá si finalmente el principio de equilibrio de poderes se vio alterado, o si, por el contrario, el control legal e institucional, en tanto dispositivos de control del Estado, actuaron de manera consecuente, no olvidando nunca que este es, para Montesquieu, una de las condiciones para la libertad política en una sociedad.

2. PESOS Y CONTRAPESOS. TENTATIVA DE CONCESIÓN DE INDULTOS A LOS PARAMILITARES Y LA ACCIÓN JURISDICCIONAL

Una mirada al mecanismo de pesos y contrapesos como control institucional responde a una de las condiciones establecidas por Montesquieu en función de la libertad política. Ello supone profundizar sus planteamientos sobre el particular, analizar las dinámicas del equilibrio o posible desequilibrio que ilustrarían más claramente la teoría para resaltar la practicidad de los postulados, evidenciadas a partir de una puja entre las ramas legislativa y ejecutiva y la judicial en desarrollo de sus funciones de control del poder. En este capítulo se considera apropiada la relación existente entre concentración de poder y su uso en beneficios particulares y destaca la validez del mecanismo de control propuesto por el teórico.

La libertad política, para Montesquieu, debe ser el fin último de las sociedades, por lo que han de tener gobiernos moderados. Según el autor, la libertad "sólo puede consistir en poder hacer lo que se debe querer y en no estar obligado a hacer lo que no se debe querer", (1984 pág. 167) advirtiendo que el poder, cuando se concentra, degenera en excesos hacia los demás. Debe retomarse uno de los puntos delineados en el capítulo uno: la prominente importancia que tiene –tanto para Montesquieu como para la tradición liberal– el resguardar las libertades individuales frente a gobiernos despóticos.

Desde luego, un gobierno moderado tiene unas características determinantes. Montesquieu establece que para formarlo "hay que combinar los poderes, regularlos, atemperarlos, ponerlos en acción, poner lastre, por así decir, a uno para que pueda resistir a otro: es una obra maestra de legislación […]" (pág. 89). Esto precede el segundo punto esbozado en el capítulo primero: el principio de distribución jurídica. Como lo indica la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano (1789), toda sociedad que con una parte dogmática no tenga garantizados sus derechos y que con una parte orgánica no instaure una división de los poderes, carece de constitución. Con todo, se está frente a una de las características implícitas en el principio de división de poderes: el control.

En Colombia, el artículo 113[20] de la Constitución de 1991 encuentra explicación en unos dispositivos de control denominados "pesos y contrapesos", que se apropian a su vez del principio de que el poder debe contener al poder, al igual que dispone que deben haber dosis moderadas del mismo para evitar la formación de "nichos absolutos […] que terminen estropeando los derechos de los individuos" (Barreto-Rozo 2011, pág. 218). Con ello, el país no solo adopta la división de poderes en tres ramas, (ejecutiva, legislativa y judicial) sino que establece que, al ser un Estado Social de Derecho[21], toda actividad debe ser ajustada a la Constitución, en primera medida, y a las leyes.

Según Montesquieu, en una sociedad donde haya leyes, "la libertad es el derecho de hacer todo lo que [estas] permiten"; (1984, pág. 167) así nadie en el poder ha de tener la capacidad suficiente para actuar por encima de ellas en beneficio propio; de pasar, los controles institucionales constitucionalmente preparados deben accionarse ya que la libertad se vería gravemente amenazada de no respetarse el derecho.

Una vez establecido como antecedente que a través de ciertos mecanismos un buen porcentaje del Congreso se habría compuesto por disposición de actores paramilitares y políticos con intereses afines, y que los primeros también habrían contribuido en la elección del Presidente durante dos periodos consecutivos, configurando una distribución social del poder bajo la cual dos de las ramas del poder público –ejecutiva y legislativa– se encontrarían sujetas a las determinaciones de estos actores; y considerando que para Montesquieu "es una experiencia eterna, que todo hombre que tiene poder siente la inclinación de abusar de él, yendo hasta donde encuentra límites" (1984, pág. 168), lo que se analizará ahora es cómo se utilizó el poder obtenido en beneficio particular, motivando la acción institucional en virtud del principio de equilibro de poderes.

Se centrará en el proceso por el cual el ejecutivo y el legislativo dispusieron de un marco jurídico para la desmovilización paramilitar, afín a las peticiones de estos en materia de penas, queriendo indultarlos clasificándolos como delincuentes políticos en oposición a la constitución y a las leyes. Al hablar de indulto se hace referencia a la figura jurídica por

[20] "Son ramas del poder público, la legislativa, la ejecutiva y la judicial. Además de los órganos que las integran existen otros, autónomos e independientes, para el cumplimiento de las demás funciones del Estado. Los diferentes órganos del Estado tienen funciones separadas pero colaboran armónicamente para la realización de sus fines" (Constitución Política de Colombia 1991, Art. 13).

[21] Así éste sea un concepto más contemporáneo, se entiende de igual manera que las relaciones civiles están ajustadas a derecho y no al hecho.

la cual, mediante acto proferido por el Gobierno Nacional, se produce el perdón a una condena impuesta (Procuraduría General de la Nación 2007, pág. 56). Se analizará, asimismo, la acción jurisdiccional de la Corte Constitucional y la Corte Suprema para determinar si hubo o no control de pesos y contrapesos por equilibrio de poderes.

2.1. Pacto de Ralito y Acuerdo de Ralito

La existencia de pactos legales e ilegales, objeto de este acápite, pueden considerarse el punto de encuentro entre las alianzas de actores políticos, élites regionales y paramilitares, y la determinación de una legislación afín a los intereses de estos grupos armados ilegales.

No deben confundirse el ilegal Pacto de Ralito (año 2001) con los Acuerdos de Santa Fe Ralito (año 2003) entre el gobierno y los paramilitares; "refundar la patria y firmar un nuevo pacto social" (Semana 2007b, párr. 1) eran los propósitos del primero; del segundo, sentar las bases para el inicio de un proceso que lograse "la paz nacional a través del fortalecimiento de la gobernabilidad democrática y el restablecimiento del monopolio de la fuerza en manos del Estado"[22] (Gobierno Nacional & AUC, 2003). Este aparte dará mayor despliegue a las implicaciones del Pacto de Ralito, cerrándose con el ya introducido acuerdo.

Comiéncese trayendo de presente un principio fundamental que establece que la Constitución es norma superior, y que tanto nacionales como extranjeros tienen el deber de acatarla así como a las leyes, y obedecer y respetar a las autoridades. (Constitución Política de Colombia 1991, Art. 4to) Se sigue que existe igualmente una obligación de respetar tanto la Constitución como la ley de parte de quienes están en la política e integran instituciones y corporaciones públicas.

A pesar de que la Constitución de 1991 se ha concebido como un producto del consenso y del pacto entre las partes[23], el

> […] movimiento político y social nacional agrupado en torno al paramilitarismo, [consolidado] durante los primeros años de vigencia jurídica de la Constitución [y] el

[22] Acuerdo efectuado entre el Gobierno Nacional y las AUC
[23] Sectores tradicionales de la política, guerrilleros, minorías, grupos cristianos, etc.

> proyecto político que gobernó entre 2002 y 2010 [expresan] un rechazo conservador al proyecto político contenido en la Constitución. (Hernández 2013, pág. 52).

Si bien el Pacto de Ralito se efectuó a mediados del año 2001, es importante porque evidencia que en Colombia "no existe un auténtico consenso constitucional" (Hernández 2013, pág. 49) de parte de los actores paramilitares y de los políticos participantes[24], lo que justificaría la alteración de un pilar como el equilibrio de poderes y haría presumir que al no haber asentimiento con los principios de la Constitución los actores contrarios a ella no respetarían el ordenamiento fundamental, al menos no por cuanto represente obstáculo para el alcance de sus intereses.

Así, la utilización del poder en función de beneficios propios radicaría no sólo en la necesidad de mantener el *statu quo* por parte de terratenientes, narcotraficantes, ejército, policía y sectores de las clases políticas locales frente a la amenaza de una democratización por la Constitución del 91 y las negociaciones con la guerrilla (López 2010, citada en Hernández 2013, pág. 66), sino también en la necesidad de los paramilitares de beneficiarse de un proceso de negociación con el Estado (Valencia 2007b, pág. 3).

El Pacto de Ralito fue un documento redactado en una finca del corregimiento de Santa Fe Ralito (Tierralta, Córdoba). Allí se dieron encuentro jefes paramilitares como "Don Berna", "Diego Vecino", "Jorge 40" y Salvatore Mancuso y aproximadamente 100 políticos y funcionarios de la Costa Atlántica (Verdad Abierta 2010b, párr. 12), políticos que más adelante serían procesados por "parapolítica".

Pretender "refundar la patria" y "firmar un nuevo pacto social", tal como pone textualmente el documento final es, para Hernández (2013), evidencia "del fracaso constitucional de 1991 porque relevantes y múltiples actores políticos y sociales rechazan los valores instituciones y principios de la Constitución Política" (pág. 72); agravándose dentro del contexto de esta monografía porque, en virtud de la legalidad, la constitucionalidad, la institucionalidad, y la necesidad de regular el poder excesivo concentrado en manos específicas "el Estado normativo […] fue fortalecido con la Constitución del 91" (pág. 70).

[24] En el fenómeno posteriormente denominado "parapolítica".

La Fiscalía, en investigaciones iniciadas una vez se conoció el documento del Pacto de Ralito en el 2007, indicó que pudo tratarse de un movimiento paramilitar destinado a la obtención de beneficios en una posible desmovilización, por medio de la formación de un "nuevo orden por fuera de la política del Estado [por lo cual] era un acuerdo ilegal y generaba riesgo para la seguridad del Estado (Verdad Abierta 2010b, párr. 25).

Finalmente, en 2003, el Gobierno Nacional y las AUC darían inicio al Acuerdo de Ralito tras una "Fase Exploratoria adelantada entre las partes a partir del mes de diciembre de 2002" (Gobierno Nacional & AUC, 2003, pág. 1).

2.2. Del acuerdo de Ralito a la Ley 975 de 2005: Ley de Justicia y Paz

Tres episodios caracterizarían el proceso de formulación y promulgación de la Ley de Justicia y Paz (Grajales 2011, pág. 15): *i)* el tratamiento especial que habría de tener la justicia para con el paramilitar correspondiente a su naturaleza política; *ii)* el debate social y parlamentario entre el gobierno y los defensores de la Ley; y *iii)* la intervención de las cortes que introdujeron cambios importantes a la misma. Dicha intervención constituirá, dentro de los propósitos de la monografía, una acción conforme al equilibrio de poderes como principio constitucional, de forma que se respetara la Constitución y la legislación.

Con el Acuerdo de Ralito, el gobierno tenía elementos para propiciar en el Congreso el voto de un marco jurídico para la desmovilización paramilitar. El presidente Uribe proponía acomodar la ley 418 del 97[25] que exigía que, para que el gobierno pudiese entablar negociaciones con grupos armados al margen de la ley[26], estos debían ser reconocidos como delincuentes políticos (Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo [Cajar] 2006a, párr. 30). Luego promulgó la Ley 782 eliminando tal requisito, y por medio del decreto 128 de 2003 induldaría posteriormente a los paramilitares que no tuviesen procesos judiciales y no hubiesen cometido crímenes de lesa humanidad o violado el DIH (Grajales 2011, págs.166–167); se ampliará al respecto en etapas subsiguientes.

[25] Había hecho de marco regulatorio para los diálogos de los gobiernos anteriores con las guerrillas.
[26] Grupo armado al margen de la ley: "aquel que, bajo la dirección de un mando responsable, ejerza sobre una parte del territorio un control tal que le permita realizar operaciones militares sostenidas y concertadas" (Ley 782 2002, Art. 8).

El contexto de la formulación de la Ley de Justicia y Paz como marco alternativo para juzgar las acciones efectivamente llevadas por los paramilitares –crímenes de lesa humanidad, violaciones al DIH, narcotráfico, etc.– debió sortear dificultades: movilizaciones de los movimientos de víctimas en oposición a un tratamiento laxo de los crímenes; el bloque de constitucionalidad, toda vez que Colombia era participe de tratados internacionales de protección a los DDHH y el DIH; y un eventual impasse del país con EEUU, consecuencia de llegar a indultar narcotraficantes en los procesos de desmovilización (Grajales 2011, pág. 167).

En agosto de 2003, el Ministro del Interior Fernando Londoño radicó la entonces denominada, "Ley de Alternatividad Penal". Grajales (2011) sostiene que con ello el gobierno se encontraba entre dos instancias, la mesa de Ralito y el Capitolio, donde "el contexto del Congreso parecía favorable a los paramilitares [pues] los acuerdos políticos regionales les habían permitido obtener una gran influencia en el órgano legislativo" (pág. 168).

En la Comisión Primera del Senado la ley tuvo sus primeros tropiezos. Antonio Navarro Wolf y Rafael Pardo criticaron el momento de la radicación; para ellos, un debate en ese momento representaría que el Congreso negociase la ley con los paramilitares (Fundación Social 2006, pág. 26). De manera general, el gobierno y los congresistas aliados "promovieron una ley benévola como única alternativa para alcanzar la paz. [La oposición] reivindicaba el respeto de los principios internacionales de justicia transicional", (Grajales 2011, pág. 169) lo cual explica la larga trayectoria de la ley, que terminaría aprobándose en 2005.

Empero, más allá de si las discusiones de la ley fueron temporalmente pertinentes, uno de los puntos más conflictivos fue el del tratamiento que deberían tener los paramilitares. La Ley de Justicia y Paz fue un proceso sumamente complejo y no pretende desconocerse la mayoría de los puntos que fueron abordados y debatidos[27] en el Congreso; se centrará en la problemática relacionada con la tentativa de asignación de status de delincuentes políticos a los paramilitares, con base en la influencia que estos lograron obtener en las ramas ejecutiva y legislativa del poder público.

[27] Como los referentes a los derechos de las víctimas, o las características de la justicia transicional.

Un elemento a resaltar de este proceso puede encontrarse en el discurso dado por los paramilitares Salvatore Mancuso, Ernesto Báez y Ramón Isaza, en el capitolio (2004), interpretado por Valencia (2007b) como el punto culmen de la relación entre paramilitares y políticos (pág. 22). Expusieron que

> […] ante la falta de respuesta del Estado, nos vimos forzados a cambiar sobre la marcha nuestros instrumentos de trabajo por las armas, y en nombre de todos los azotados por la violencia, resistir y enfrentar la guerra declarada a Colombia por los terroristas. Se trataba de defender nuestras vidas, nuestra dignidad y nuestro territorio. [En consecuencia] como recompensa a nuestro sacrificio por la patria, haber liberado de la guerrilla a media república y evitar que se consolidara en el suelo patrio otra Cuba […] no podemos recibir la cárcel. (Visita al Congreso 2004, citado por Grajales 2011, pág. 171)

Pese a todas las críticas que recibió la Ley en todas las materias, la asignación de un status político a los paramilitares era abiertamente equívoco considerando el ordenamiento constitucional colombiano, la relación entre las ramas del poder y el estado de la sociedad colombiana, sobre todo las víctimas del paramilitarismo.

La Corte Constitucional ha establecido que el delito político

> Es aquél que, inspirado en un ideal de justicia, lleva a sus autores y copartícipes a actitudes proscritas del orden constitucional y legal, como medio para realizar el fin que se persigue. [Por tanto] no puede darse el mismo trato a quienes actúan movidos por el bien común, así escojan unos mecanismos errados o desproporcionados, y a quienes promueven el desorden con fines intrínsecamente perversos y egoístas. Debe, pues, hacerse una distinción legal con fundamento en el acto de justicia, que otorga a cada cual lo que merece, según su acto y su intención. (Sentencia No. C-009/95, 1995, párrafo. 1)

Los beneficios propios de esta figura son fundamentales. Primero, se harían a una rebaja sustancial de la pena, que en vez de aplicarse en su máximo término de acuerdo con los crímenes cometidos, se ajustaría a un rango de entre 5 y 8 años de cárcel. Por ello, es útil en la medida en que los delitos conexos[28] serían juzgados en concordancia con el delito principal, pues, "como ambos delitos son indisociables, una vez juzgado el delito principal, los delitos conexos son considerados como cosa juzgada" (Grajales 2011, pág. 172). El delito principal, en este caso, es afectar al Estado, al orden constitucional y legal (Marín 2007, pág. 12).

[28] Delitos cuya comisión se desarrollan para lograr los fines correspondientes al delito principal.

Otro beneficio es la imposibilidad de ser extraditado[29]; el artículo 35 de la Constitución establece que "la extradición no procederá por delitos políticos". Esto era verdaderamente apetecible por los paramilitares ya que, como se indicó anteriormente, una de sus tantas actividades ilícitas era el narcotráfico, por lo que EEUU solicitaba la extradición de varios cabecillas paramilitares. El delito político, también admite la posibilidad de asilo en otros países (Fundación Social 2006, pág. 139) y, adicionalmente, permitía que los juzgados pudiesen posteriormente participar en la política y en la función pública, no quedando inhabilitados para ello por cuanto no son excluíbles para tales fines los delincuentes políticos. (Marín 2007, pág. 18).

Considerando que se contempla que los delincuentes políticos sean, con base en una motivación altruista, alteradores del orden político y que por medio de indultos sean laudables de entrar en lo político dentro de los límites legales, luego los paramilitares apreciarían el hecho de participar en política y acceder a cargos públicos. No obstante, su objetivo no era atentar contra el Estado y, pese a haber colaborado muchas veces con éste en labores contrainsurgentes, no sería correcto afirmar que fueran defensores del Estado (Grajales 2011, pág. 157).

Desde luego, en el Congreso el trámite de la Ley 975 no reconocía abiertamente que esta favorecería ampliamente a los paramilitares, puesto que el Gobierno y los congresistas a favor se mostraban en una posición en la que el marco jurídico diseñado respondía a categorías de Justicia Transicional, esto es, según

> […] una noción de justicia […] que atiende la necesidad de alcanzar la efectividad del derecho a la paz en aquellas sociedades en situación de conflicto, [pero que a la vez responda] al imperativo de enjuiciar y reparar las graves violaciones a los DDHH y DIH y lograr el esclarecimiento de la verdad al respecto [operando] dentro del tránsito de un periodo de violencia a otro de consolidación de la paz y de vigencia del Estado de Derecho, o de autoritarismo a otro de respeto al pluralismo democrático. (Sentencia C-370/2006, citado por Ortiz 2007, pág. 8)

No obstante, más exactamente, lo que los paramilitares, el gobierno y los parlamentarios afines a los intereses de estos grupos pretendían, era ajustar las actividades del paramilitarismo como sedición –tradicionalmente entendido como delito político–,

[29] Aunque posteriormente, en 2008, el Presidente Uribe extraditó a 14 de los máximos líderes de los paramilitares, punto del que se tratará más adelante.

consistente en un "alzamiento colectivo y violento contra la autoridad, el orden público o la disciplina militar, sin llegar a la gravedad de la rebelión" (Real Academia de la Lengua Española).

El artículo 71 de la Ley de Justicia y Paz efectuaba un cambio en el Código Penal, adicionando al artículo 468 un parágrafo diciendo:

> También incurrirán en el delito de sedición quienes conformen o hagan parte de grupos guerrilleros o de autodefensa cuyo accionar interfiera con el normal funcionamiento del orden constitucional y legal[30]. En este caso, la pena será la misma prevista para el delito de rebelión. (Federación Internacional de Derechos Humanos [FIDH] 2007, pág. 33)

Por ende, los miembros de los grupos paramilitares serían cobijados por este tipo de delito, anotándose que los actos cometidos por los paramilitares corresponden al delito de concierto para delinquir agravado[31], según la Corte Suprema de Justicia en sentencia del 11 de julio de 2007, Sala de casación penal.

Así las cosas, y tal como lo señalan Uprimny y Saffon (2007), en el marco de la formulación y trámite de la Ley 975, la Justicia Transicional respondería a un uso eminentemente discursivo (pág. 175), consistente en aludir frecuentemente a la verdad, la justicia y la reparación "con el fin de ocultar y legitimar procesos parciales de impunidad [evidenciándose] en el texto original [de la ley]" (pág. 177).

De esta manera, los congresistas y el Presidente, de quienes existen razones ya expuestas para considerar que concertarían una ley a la medida de los paramilitares, habrían cumplido (Valencia 2007b, pág. 22) puesto que al ajustar por medio de la figura de sedición la actividad paramilitar, los beneficios jurídicos les convendría, especialmente lo concerniente a la no extradición y la rebaja de las penas. El desenlace de las cosas dispondría que se favoreciera más lo segundo que lo primero.

Sin embargo, en lo relacionado con los pesos y contrapesos que debería existir entre las ramas del poder, habría un factor esencialmente problemático: la interpretación

[30] Antes de ser declarado inexequible.

[31] Quienes concierten para cometer delitos de genocidio, desaparición forzada de personas, tortura, desplazamiento forzado, homicidio, terrorismo, tráfico de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas, secuestro, secuestro extorsivo, extorsión, enriquecimiento ilícito, lavado de activos o testaferrato y conexos, o financiamiento del terrorismo y administración de recursos relacionados con actividades terroristas.

inconstitucional del delito político del alto gobierno y la bancada legislativa que lo secundaba, al proponer la Ley 975.

Retomando lo dicho en el capítulo precedente, según lo cual para Montesquieu todo estaría perdido si un solo grupo de hombres formularan y dispusieran las normas a voluntad puesto que utilizarían el poder en función de intereses propios, nótese que la influencia del paramilitarismo en la rama ejecutiva y en la rama legislativa logró disponer el ordenamiento para beneficiarse con un marco jurídico que, al concebirlos como delincuentes políticos, les brindara beneficios apreciables.

Para entender cómo esto resultaba inconstitucional, debe prestarse atención a la desnaturalización del delito de sedición de forma que la actividad paramilitar encuadrara en el mismo, afectando la autonomía de la rama judicial[32] (Marín 2007, pág. 2). Por otra parte, indultar a los paramilitares como delincuentes políticos, cuando en realidad los delitos cometidos por estos se tipificaban como concierto para delinquir agravado, representaba otra violación a la Constitución en la medida en que no pueden indultarse delitos de esa naturaleza[33].

Finalmente, el artículo 71 de la Ley de Justicia y Paz consagraría que al código penal se le adicionase el inciso por el cual los paramilitares serían delincuentes políticos, interpretando de manera indebida que estos eran culpables de sedición.

2.3. Competencia jurisdiccional de la Corte Constitucional

En virtud de la supremacía de la Constitución y los pesos y contrapesos en Colombia, la existencia de la Corte Constitucional garantiza que la normatividad tenga arreglo a la Carta Magna (Barreto-Rozo 2011, pág. 219). El control de constitucionalidad de este organismo judicial se encuentra reglado y una de las formas por las cuales puede operar es la demanda de inconstitucionalidad, pues la ciudadanía puede hacer control a las leyes.

[32] Si bien Marín refiere al proyecto de ley 067/2007, el mismo trataba, por otra vía, de devolver reconocimiento político a los paramilitares. Entonces, la interpretación de inconstitucionalidad a la cual la autora se refiere encuentra relación con la idea planteada acá.

[33] Jurídicamente, en el delito político, el bien jurídico tutelado es el Estado, por tanto podría concebirse un indulto. Ahora, en el concierto para delinquir agravado, el bien jurídico afectado es la sociedad y el Estado no puede conceder beneficios a quien la afecte (Marín 2007, pág. 12).

Con la promulgación de la Ley de Justicia y Paz (2005), los congresistas opositores, las organizaciones de víctimas y defensoras de DDHH hicieron llegar a la Corte Constitucional demandas de inconstitucionalidad a varios de sus artículos. En mayo de 2006, la Corte declaró inexequibles varias medidas de la ley y modificó algunas disposiciones (Grajales 2011, pág. 175); consideró que, a pesar de que los promotores de la ley lo hicieran bajo la búsqueda de la paz, esta no lo justifica todo. En criterio de la Corte,

> A […] la paz no se le puede conferir un alcance absoluto, ya que también es necesario garantizar la materialización del contenido esencial del valor de la justicia y el derecho de las víctimas a la justicia, así como los demás derechos de las víctimas, a pesar de las limitaciones legítimas que a ellos se impongan para poner fin al conflicto armado. (Sentencia C-370, 2006)

En consecuencia, las penas alternativas ajustadas a las condenas de los paramilitares debían condicionarse a mayor exigencia en virtud de los derechos de las víctimas.

Si bien muchas organizaciones sociales y parlamentarios opositores habían denominado a la Ley como "ley de impunidad" o "amnistía oculta", (Grajales 2011, pág. 175) la Corte endureció las consecuencias a quienes omitieran detalles en declaraciones o declararan falsedades; estipuló una pena de hasta 70 años a quien hubiese cometido delitos de lesa humanidad; obligó a los paramilitares a reparar a las víctimas; y accedió a que se tuviesen penas de 5 a 8 años si se cumplían todos los requisitos de la Ley.

La Corte Constitucional declararía inexequible el artículo 71 por vicios de forma durante su votación, pero no por razones de fondo, es decir, "la sentencia no dijo que su contenido material era inconstitucional ni constitucional" (Marín 2007, pág. 10) y, si bien esa medida "permitió evitar un choque frontal con el gobierno y el Congreso […] abrió la posibilidad a otras acciones jurídicas" (Grajales 2011, pág. 176).

2.4. Decreto 4436 del 2006

El decreto reglamentario 4436/06 es una medida que altera de igual manera el equilibrio de poderes en Colombia (Quinche 2009, pág. 205). A través de este, el gobierno, proyectando reglamentar la Ley 782 de 2002, señaló que "la sentencia de la Corte Constitucional tenía solamente efectos hacia el futuro, todas las personas que se hubiesen desmovilizado o

cometido el delito de sedición antes del 18 de mayo del 2006[34] podrían seguir siendo considerados delincuentes políticos" (Marín 2007, pág. 10).

Como tal, es un texto de no más de tres artículos donde "no hay reglamento alguno, pues lo que se vierte en el decreto es la decisión presidencial de hacer valer, como sea, que el paramilitarismo es una forma de sedición, un delito político" (Quinche 2009, pág. 196). Ello no sólo es inconstitucional por las razones ya señaladas, sino que, como lo señala Quinche (2009), "un simple reglamento no puede imponer una interpretación que es de competencia de los jueces [pues] el presidente tan solo puede reglamentar y lo vertido en el decreto no es un reglamento" (pág. 198).

Adicionalmente, si bien se ha resaltado que la influencia paramilitar se presentó tanto en la rama ejecutiva como en la legislativa, con este decreto el ejecutivo tomó atribuciones correspondientes al legislativo, pues "el gobierno nacional [incurrió] en una violación al principio constitucional de la reserva legal, según el cual sólo el Congreso de la República puede legislar en materia penal, no el poder ejecutivo" (Cajar 2006b, párr. 2).

No es el interés de esta monografía recaer sobre propiedades del Derecho; rescátese de lo mencionado, más que los elementos eminentemente jurídicos, la idea general de que las ramas del poder público, al estar en alguna medida dispuestas por los intereses de los paramilitares, no sólo excedieron la distribución social en el equilibrio de poderes de Montesquieu, sino que también incurrieron en procedimientos que afectaban el mecanismo constitucional de pesos y contrapesos en beneficio particular, alterando el principio de equilibrio de poderes.

Así, en este estadio, con el decreto reglamentario 4436/06 el control institucional de la rama judicial estaría siendo salvado por la rama ejecutiva en función del interés paramilitar, esto es, asignarle status político.

2.5. Competencia jurisdiccional de la Corte Suprema de Justicia

La Corte Suprema de Justicia jugó un papel importante a propósito de la cuestión. Dada su naturaleza, para el caso opera de acuerdo con el juzgamiento de un paramilitar del Bloque

[34] Fecha de la sentencia de la Corte Constitucional. Al no tener efectos retroactivos los paramilitares seguían estando bajo el amparo de las disposiciones iniciales de la Ley 975.

Elmer Cárdenas (Orlando Caballero Montalvo), que había sido capturado y era procesado por el Tribunal de Antioquia. En el litigio se solicitó cesación de procedimiento por la Ley 782/2002, la Ley de Justicia y Paz y el artículo 71 de la misma (Grajales 2011, pág. 177). Tras negada la petición, el caso se apeló ante segunda instancia: la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema, quien ratificó la decisión en razón de que el paramilitar debía ser juzgado por concierto para delinquir agravado; en consecuencia, no era correcto aplicársele indulto por delito político (Marín 2007, pág. 10).

Dada la no retroactividad de lo declarado inexequible por la Corte Constitucional, la Corte Suprema estableció que el artículo 71 de la Ley 975 era inconstitucional, toda vez que *i)* constitucionalmente hay criterios para el entendimiento del delito político; *ii)* hay un antagonismo entre el delito político y el concierto para delinquir; *iii)* vincular el concierto para delinquir con el delito político violaría los derechos de las víctimas; *iv)* si bien la sentencia de la Corte Constitucional no tiene efectos retroactivos, "cualquier juez puede aplicar la excepción de inconstitucionalidad por razones de fondo para evitar su vigencia temporal antes de la declaratoria de inexiquibilidad por razones de forma" (Corte Suprema de Justicia, sentencia del 11 de julio de 2007, citado por Marín 2007, Pág. 11).

De igual manera, la Corte Suprema en su sentencia hizo una aclaración de fondo, más que de forma, sobre el paramilitarismo como acto de sedición, ya que establece que

> Aceptar que en lugar de *concierto para delinquir* el delito ejecutado por los miembros de los grupos paramilitares constituye […] *sedición*, no solo equivale a suponer que los mismos actuaron con fines altruistas y en busca del bienestar colectivo sino, y también, burlar el derecho de las víctimas y de la sociedad a que se haga justicia y que se conozca la verdad. (Corte Suprema de Justicia, sentencia del 11 de julio de 2007)

La precaución de la Corte Suprema radicaba en que la impunidad no caracterizara los procesos de desmovilización a través de indultos, pues "podrían ser tomadas a discreción por el ejecutivo y legislativo y sin posibilidad de control judicial" (Corte Suprema de Justicia, sentencia del 11 de julio de 2007). Se sigue que no sólo los procesos debían garantizar verdad, justicia y reparación, sino que el equilibrio de poderes entre las ramas del poder y los mecanismos de pesos y contrapesos no debían vulnerarse.

Luego de esta sentencia, el Presidente Álvaro Uribe declaró que la Corte Suprema de Justicia tenía sesgos ideológicos encontrándose a favor de las guerrillas y en contra de la paz (López y Sevillano 2008, pág. 77).

Pueden parcialmente concluirse fundamentos para el general de la monografía. Montesquieu acierta al advertir que el poder concentrado degenerará en su uso para beneficios particulares, de ahí que pensadores posteriores de relevancia como Benjamin Constant se apropiaran de esa premisa y dijeran que el despotismo era producto del poder otorgado y no de sus detentores, y que los controles debían dirigirse hacia el arma, no hacia el brazo, pues "hay armas que son demasiado pesadas para la mano del hombre" (Constant 1993 citado por Silva-Herzog Márquez 2001, pág. 26)

De manera afortunada, el mismo Montesquieu consideró que la fórmula para impedirlo era la existencia de unos pesos y unos contrapesos entre los poderes, de forma que entre estos se controlasen; en virtud de ello, la función jurisdiccional de las cortes en Colombia no permitió que la influencia paramilitar en dos de las ramas del poder público dispusieran un marco jurídico en su favor que, además, era abiertamente inconstitucional. Los poderes, en términos generales, sujetos a mecanismos dispuestos por disposición constitucional[35], deberían garantizar según la lógica de su pensamiento la libertad tal como la concibe siendo "la necesidad de circunscribir las decisiones y las acciones a un marco legal regulatorio que establece la distinción entre lo posible y lo permitido" (Fuentes 2011, pág. 51); puesto que con poderes atemperados y una sujeción a la ley establecida, la libertad de los ciudadanos puede verse, en un primer estadio, salvaguardada.

Con lo establecido, el equilibrio de poderes en Colombia se mantuvo gracias a la acción de las cortes. Sin embargo, Montesquieu establece una condición adicional para la plenitud de la libertad política del individuo; su desarrollo se analizará en el capítulo final.

[35] Parte de la idea de la libertad política en una sociedad en la que haya leyes, se desarrolla en el libro XI de *Del espíritu de las leyes:* "De las leyes que dan origen a la libertad política en su relación con la constitución".

3. LA LIBERTAD EN COLOMBIA. UNA MIRADA A PARTIR DE LA TEORÍA DE CHARLES DE MONTESQUIEU

Se analizó la libertad política a partir del equilibrio del poder. Ahora, se tratará en su relación con el ciudadano[36]. Para Montesquieu (1984), no basta determinar la existencia de la libertad política en un equilibrio entre los poderes en sus dos componentes, existiendo un segundo supuesto que garantizaría la libertad política en una sociedad: la seguridad o la opinión que cada quien tenga de su seguridad (pág. 198), siendo posible que la "constitución sea libre y el ciudadano no lo sea, o que el ciudadano sea libre y la constitución no, [donde] la constitución será libre de derecho y no de hecho, y el ciudadano será libre de hecho y no de derecho" (pág. 198). Entonces, debe existir una constitucionalidad que establezca libertades, determinada por poderes contrapuestos institucionalmente, pero que también se materialice en las relaciones sociales.

García (1986) clarifica este supuesto relacionándolo con "la libertad del ciudadano a vivir con seguridad frente a los posibles ataques de sus vecinos o bien de los príncipes contra su vida [y] propiedad" (pág. 176), con la condición de que los conflictos con los otros ciudadanos no se resuelvan de hecho y "que la limitación de su esfera de libertad y propiedad se realice mediante ley [pues] su libertad es la libertad de vivir conforme a las leyes conocidas por él y, por tanto, participadas" (pág. 176).

Así, es posible diferenciar la aplicación de las normas que regulan la distribución institucional de los poderes estatales –limitando su provecho cometiendo excesos en beneficio privado–, de la aplicación de las normas y la relación entre ciudadanos para que se tenga, asimismo, la percepción de seguridad de que otro ciudadano no atentará contra su vida y propiedad como si fuese un gobernante.

El componente del control institucional evidenció cómo la rama judicial logró mantener el equilibrio de poderes, la constitucionalidad y la legalidad, ante la tentativa de asignación de status político a los paramilitares en la Ley de Justicia y Paz. Empero, es necesario analizar la libertad en relación con el ciudadano, esclareciendo ese componente

[36] Este argumento se presenta en el Libro XI: "De las leyes que dan origen a la libertad política en su relación con la constitución", desarrollándose en el Libro XII: "De las leyes que den origen a la libertad política en su relación con el ciudadano".

de la libertad en Montesquieu. Teóricamente, mientras la ley deba asegurar al ciudadano la no amenaza de su vida y propiedad, estos elementos serán analizados, pues esta monografía concibe la génesis de la Ley 975 y también el proceso de desmovilización paramilitar hasta el 2010.

Se estudiará la afectación a la vida de los ciudadanos luego de los procesos de desmovilización, y las dinámicas relacionadas entre el paramilitarismo y la propiedad, finalizando con una mirada particular al cumplimiento de la ley; correspondiendo al objetivo de esclarecer la noción de libertad política en relación al ciudadano, o sea, ver cómo a pesar de un efectivo equilibrio entre los poderes la libertad política puede verse amenazada por incumplirse esa segunda premisa.

3.1. Una aproximación al proceso de desmovilización paramilitar. Algunas cifras y dinámicas[37]

Iniciando con cifras que den cuenta del proceso general de desmovilización paramilitar, según la Oficina Alto Comisionado para la Paz ([OACP] 2006) el total de paramilitares colectivamente desmovilizados ascendió a 31.671 (pág. 99), y si bien la cifra es del 2006, no ha cambiado drásticamente; con desmovilizaciones individuales, se obtiene que en total se desmovilizaron 35.411 paramilitares a junio de 2012 (Observatorio de Procesos de Desarme, Desmovilización y Reintegración 2014).

Confrontando con información consultada en la Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía, los postulados a pena alternativa por la Ley 975 son 4.740[38] a enero de 2014 (Fiscalía General de la Nación 2014). No es significativa la variación, pues cotejando con cifras disponibles a junio de 2010, se encuentra que estaban postulados 3.994 miembros de grupos paramilitares entre miembros, comandantes, miembros privados de la libertad y desmovilizados individualmente (Valencia y Mejía 2010, pág. 67). El número de paramilitares desmovilizados vs. los postulados a la Ley 975 evidencia que sólo 11% del total se acogió a la alternatividad penal; primordial en tanto pauta la comprensión del

[37] Esta monografía propone como alcance el periodo 2002–2010. Se partirá del año 2006 en esta etapa, puesto que ya para este año la mayoría de grupos paramilitares se habían desmovilizado (Ver anexo 11), y mayoritariamente se usarán estadísticas disponibles con corte al 2010.

[38] Precisando que corresponde no sólo a paramilitares sino a todo integrante de grupo armado ilegal que decida desmovilizarse. Hay, desde luego, integrantes de más de un grupo guerrillero.

cumplimiento de la Ley, pues el aproximadamente 90% restante ha sido indultado en razón de la Ley 782 de Orden Público y el decreto reglamentario 128 de 2003 (Marín 2007, pág. 16).

No es fundamental para este aparte estudiar la Ley 782, ni los efectos particulares producidos por otro decreto, el 128/2003; retómense genéricamente ya que la Ley 975 es, en realidad, la alternatividad penal a dicha Ley de Orden Público. El anteriormente introducido decreto 128/ 2003 (reglamentario de la citada Ley 418/1997) fue por el cual se desmovilizaron la gran mayoría de los paramilitares. Se trataba de un decreto ley, pero según Quinche (2009) "para eludir el control de la Corte Constitucional, se expidió una norma con apariencia de decreto reglamentario, en un caso clásico de elusión constitucional" (Pág. 191). El inconveniente del mismo es que evita formalizaciones judiciales para la desmovilización, y "mediante simples procesos administrativos, se da lugar a numerosos beneficios judiciales, económicos, de salud y de seguridad social" (pág. 192).

Entonces, el Presidente Álvaro Uribe, proponiendo la formulación de un marco legislativo para la desmovilización paramilitar, con la Ley 782 eliminó el requisito de clasificar a los grupos armados ilegales como delincuentes políticos para negociar con estos (Grajales 2011, pág. 167), beneficiándolos con: "medidas de indulto, cesación de procedimiento, resolución de preclusión de la instrucción o resolución inhibitoria [los cuáles] son exclusivos para delincuentes políticos" (Marín 2007, pág. 9), aplicables sólo a quienes no tuviesen procesos penales, o hubieren cometido crímenes de lesa humanidad y violaciones al DIH (Grajales 2011, pág. 167).

Por tanto, las desmovilizaciones colectivas donde no aparecieran investigados o, donde habiendo un crimen "no esté individualizado un paramilitar como presunto autor, quedan en la impunidad por vía del decreto 128 [por el cual] la inmensa mayoría de las personas se desmovilizaron […]" (Comisión Colombiana de Juristas [Coljuristas] 2005, pág. 1). La Ley 975 media jurídicamente la desmovilización de quienes sí se encuentren procesados por delitos no indultables, aplicándoles la alternativa penal de cinco a ocho años de cárcel se cumplir requisitos.

Empero, lo inconveniente del asunto radica en los efectos posteriores a la desmovilización paramilitar, habida cuenta de que unos 31.000 paramilitares resultaron

indultados a través del decreto 128/2003 (Cajar 2010). Sobre esto referirá el componente paramilitar que, por diversas razones, alimentarían el fenómeno de las Bandas Criminales (Bacrim) en las regiones.

3.2. Fenómenos similares, denominaciones distintas

No es de provecho para esta monografía debatir si Bacrim y paramilitares son sinónimo; más bien resáltese la participación de exparamilitares en la conformación de estos grupos ilegales. La siguiente afirmación del Alto Comisionado para la Paz sirve como punto de partida:

> Las AUC […] se acabaron. Hay que hacerle un llamado a todos los ciudadanos para que tengan eso muy presente, porque puede aparecer de pronto por allí un extorsionista que pretenda actuar a nombre de las AUC. Las AUC ya no existen. La totalidad de los grupos que conformaron las [AUC] ya se desmovilizaron y entregaron sus armas. (Alto Comisionado para la Paz 2006, citado por FIDH 2007, pág. 36)

Para la FIDH (2007) esto no concuerda con la realidad, pues "existen varios factores que indican que el fenómeno del paramilitarismo continúa funcionando en las distintas regiones del país" (pág. 36) siendo que *i)* grupos disidentes al interior de las estructuras paramilitares no aceptaron los condicionamientos del gobierno ante la desmovilización; y *ii)* los programas de reinserción fracasaron, ocasionando que los paramilitares se reincorporaran bajo nueva denominación, volviendo a la comisión de crímenes en áreas donde poseían control territorial y militar (pág. 36).

De ahí que para Reed (2001) conceptualmente las Bacrim puedan considerarse continuidad paramilitar, pues con la ausencia de control oficial en los procesos de desmovilización, se posibilitó que los paramilitares "usaran las ceremonias de entrega como dispositivo de escondite de personas y estructuras enteras [logrando] que sus reservas estratégicas nunca fueran identificadas" (párr. 3).

En 2007, el primer informe de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación ([CNRR] 2007) calculó que la proporción de desmovilizados en Bacrim podría ser de 17% –pudiendo ser mayor– (pág. 5) y, para considerar su crecimiento, la Dirección de Carabineros y Seguridad Rural de la Policía Nacional indicó que, en 2010, el

número de integrantes de Bacrim era de 3.749 y, en 2011, de 69 líderes de Bacrim capturados, el 47% de estos habían sido miembros de las AUC (Indepaz 2012, pág. 2).

La Misión de Apoyo al Proceso de Paz [MAPP-OEA] refirió la participación de mandos medios de las antiguas AUC en la dirigencia de las nuevas estructuras armadas mostrando que, no solo algunos de estos no participaron en las desmovilizaciones sino que, en sí mismas, las Bacrim "reflejan la alianza entre antiguos paramilitares y narcotraficantes (MAPP-OEA 2007, citado por FIDH 2007, pág. 36) La Dirección de Inteligencia Policial reveló que "de los 12 principales líderes de grupos sucesores de los paramilitares que la Policía informó haber capturado entre enero y octubre de 2012, más de la mitad son exparamilitares" (Human Rights Watch [HRW] 2013, pág. 38).

Los exparamilitares no sólo participaban en la formación y conformación de Bacrim sino que traficaban droga, incorporaban miembros (niños incluidos) y atacaban "defensores de derechos humanos, líderes afrocolombianos e indígenas, sindicalistas y grupos de víctimas que reclaman justicia y la restitución de tierras" (HRW 2012, pág. 3) en el ámbito regional; y así como las redes entre actores ligados a la actividad paramilitar descritas anteriormente permitieron, además, la determinación de un poder en la política nacional, la victimización sistematizada de las Bacrim hacia ciertos sectores sociales constituye un "mecanismo de perpetuación de su poder en las distintas regiones (FIDH 2007, pág. 37).

Iniciando 2011, el General de la Policía Oscar Naranjo expuso que, a lo largo de 20 departamentos, las Bacrim se encontraban presentes en aproximadamente 152 municipios (Arias 2012, pág. 8), posibilitando entender cómo para los habitantes de los territorios flagelados por la presencia paramilitar "son los mismos grupos, y en algunas oportunidades los personajes, que han actuado desde antes en los procesos de desmovilización" (Indepaz 2012, pág. 2) quienes vuelven a practicar acciones criminales bajo la figura de Bacrim.

3.3. Afectaciones a la vida

Se introdujo que uno de los elementos concernientes a la seguridad o percepción de seguridad entre los ciudadanos es la protección a la vida. Si bien el número de desmovilizados fue cuantitativamente contundente, su reinserción a la vida civil no ha sido del todo exitosa, pues, no sólo las nuevas Bacrim operan en territorios antiguamente

controlados por paramilitares, sino que en buena medida están conformados por sus exmiembros, bien sea porque nunca se desmovilizaron, o porque, aunque iniciaron el proceso, reincidieron en el cometimiento de delitos.

Las Bacrim operan en grupos más pequeños que los frentes de las otrora AUC, variando entre regiones; no utilizan los mismos nombres y no han formado una organización nacional, pero "son núcleos armados [que] se han convertido en poderes de facto, al igual que sus antecesores de las AUC" (Romero y Arias 2008, pág. 40) y detentan el poder en determinadas zonas del territorio, con las consecuencias que ello trae para la población. Por tanto, no puede desconocerse que la existencia de grupos ilegales, sea cual sea su denominación, dedicados al ejercicio de presión armada para mantener el control territorial, social y político de las economías ilícitas[39]; a extorsionar y "boletear"[40] a comerciantes y empresarios regionales; a amenazar, asesinar selectivamente, desaparecer y desplazar personas forzadamente (CNRR 2007, pág. 16), sea el deterioro de la seguridad y una amenaza a la vida de los ciudadanos.

Gracias a datos procesados por la CNAI, puede identificarse un número aproximado de 126 líderes de DDHH asesinados durante los años 2007 y 2011 (Arias 2012, pág. 15); pero salvando de cierta manera la inconveniencia del usual conflicto entre cifras oficiales y no oficiales, para efectos de esta monografía se presentan apartes de informes de organismos nacionales e internacionales sobre la ocurrencia de los fenómenos. Resulta esclarecedor cuando se tiene que el gobierno indicaba, para el 2008, que los municipios afectados por las Bacrim no superaban los 100, mientras la Cerac[41] reportaba 158, y la MAPP-OEA 153 (Romero y Arias 2010, pág. 38).

Para vincular las Bacrim con la pérdida de vidas humanas en los territorios, la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento [Codhes] en su informe No. 77 expone que, durante el año 2010, en 62 de los 86 municipios de las zonas CCAI (Centros de Coordinación de Acción Integral[42]) seguían activos, al menos, ocho Bacrim, entre grupos antiguos, rearmados y nuevas estructuras (Codhes 2011, pág. 2). Asimismo, en

[39] Específicamente del narcotráfico
[40] Impuesto ilegal que se cobra a cambio de la tranquilidad y la protección de la víctima.
[41] Conflict Analysis Resource Center
[42] Centros que integran las entidades del gobierno colombiano apoyando la recuperación militar del territorio con programas sociales y económicos, coordinados por el Ministerio de Defensa y la Agencia Presidencial para la Acción Social.

estos 86 municipios –17 departamentos y siete regiones–, ocurrieron 19 masacres con un registro de 92 personas asesinadas y "176 más fueron víctimas de homicidios selectivos, entre los que se encuentran 11 indígenas, 7 servidores públicos, 4 líderes comunales, 1 defensor de los Derechos Humanos, 1 líder afrocolombiano y 1 periodista" (Codhes 2011, pág. 2).

Por otra parte, el Observatorio del Programa Presidencial de DDHH y DIH (2011) señala con base en cifras de la Policía Nacional que en 2010 ocurrieron 39 casos de masacres dejando 183 víctimas. En los casos de autores identificables, las Bacrim mayoritariamente perpetuaron estos crímenes (pág. 40) concentrándose en tres regiones: Noroccidental[43], Suroccidental[44] y Nororiental[45], regiones entre las cuales operan Bacrim como Los Urabeños, Los Rastrojos, Los Paisas, entre otros. (Observatorio del Programa Presidencial de DDHH y DIH 2011, págs. 42-49)

Estos poderes de facto pueden llegar a afectar profundamente el estado de la libertad de la población –sobre todo regionalmente– y las herencias territoriales a partir de los procesos de desmovilización paramilitar han dejado secuelas en la población. Por ejemplo, en el departamento del Chocó, debido al historial conflictivo del cual han participado tanto paramilitares como Bacrim, estos últimos "no tienen que efectuar acciones violentas extremas, pues la gente tiene presente el nivel de daño del que son capaces y la sevicia con la que pueden actuar" (Romero y Arias 2010, pág. 44).

Esta dinámica local, de la cual no puede presumirse que no se replique en otras regiones del país, llama la atención sobre el tipo de control que se ejerce sobre la población y el territorio, permitiendo cuestionar la autoridad del Estado en la periferia nacional a la vez que llama la atención sobre las características de las normas informales que rigen las dinámicas sociales y las relaciones entre los ciudadanos.

3.4. Afectaciones a la propiedad

[43] Antioquia y Córdoba
[44] Valle del Cauca, Cauca y Nariño
[45] Arauca, Cesar y Guajira

La propiedad, segunda categoría de observación de la seguridad según García Macho, se analizará como factor cuyas dinámicas relacionadas con Bacrim afectarían la libertad política según Montesquieu en su segunda condición.

Para ello, dos elementos se proponen para observar: *i)* los desplazamientos forzados desde la desmovilización paramilitar hasta el 2010; y *ii)* las amenazas y crímenes relacionados con peticiones de restitución de tierra a los desplazados por el conflicto. Si bien se entiende que las pujas por retornar a la tierra aumentaron exponencialmente con la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras[46], no puede ignorarse que el fenómeno posterior a la desmovilización paramilitar estuvo presente en las dinámicas de control de la tierra desde antes de entrar en vigencia. El presente acápite no se traza sistematizar cifras; pretende ilustrar que en las regiones el control no es ejercido por el Estado y que igualmente imperan normas de orden informal que no permiten a los desplazados regresar.

Pártase de que "el abandono y despojo de tierras está íntimamente relacionado con el desplazamiento forzado de la población campesina" (CNRR pág. 49). A este respecto, se indica que, entre 2006 y 2010, tan sólo en los departamentos de Bolívar, Córdoba y Sucre –fuertemente afectados por paramilitarismo y Bacrim– el desplazamiento forzoso afectó al siguiente número de personas:

Tabla 1. Número de personas desplazadas departamentos de Bolívar, Córdoba y Sucre (2006–2010)

DEPARTAMENTO[47]	POBLACIÓN DESPLAZADA
Bolívar	11.074
Córdoba	30.211
Sucre	5.875

Fuente: (CNRR 2010, Pág. 54)

La Ley 975 dispuso que tanto para las desmovilizaciones colectivas como para las individuales, debían entregarse la totalidad de las tierras producto de la actividad ilegal al

[46] Ley 1448 de 2011

[47] La Costa Atlántica es una región ilustrativa. Allí operan un 40% de los núcleos armados ilegales registrados, y la tercera parte de los municipios afectados por estos grupos se ubican ahí (Romero y Arias 2008, pág. 43).

Estado vía Fondo para la Reparación de las Víctimas (creado por la Ley) para luego ser concedidos a los afectados (OACP 2005, págs. 23, 24, 34 y 49).

La CNRR (2010) advierte sobre la identificación precisa de la relación entre el desplazado y el predio correspondiente, pues las condiciones para posibilitarlo son inalcanzables actualmente ya que "la presencia de actores armados continúa, la legislación sobre temas agrarios es prácticamente inoperante, y la institucionalidad regional se ve sujeta a fuertes presiones de intereses privados" (pág. 55).

Esto da cuenta de que existe, luego de la desmovilización paramilitar, un panorama similar al previamente existente, pues siguen produciéndose desplazamientos y abandonos inducidos forzadamente de los habitantes a sus tierras. Adicionalmente resalta, en cuanto a la presión de intereses privados en la institucionalidad regional, que la apropiación "no sólo fue prioridad de los jefes paramilitares sino también de sus asociados (políticos, empresarios y narcotraficantes) que hallaron en ese accionar una fuente de riqueza" (Tribunal Superior Distrito Judicial de Antioquia 2013, citado por HRW 2013, pág. 44).[48]

Sólo en 2010, en total fueron desplazadas 19.057 personas en el país por acciones de Bacrim (Arias 2012, pág. 11). De igual manera, desde 2008 HRW (2013) documentó abusos deliberados y constantes –entre amenazas, nuevos desplazamiento forzados y asesinatos– contra más de 15 líderes y miembros de Tierra y Vida, una asociación de desplazados por la restitución de tierras (pág. 59), y un caso explicativo es el de su líder, Juan Agustín Jiménez Vertel, asesinado en Antioquia en 2008, donde en una carta enviada al Presidente Álvaro Uribe expresaba

> Mi preocupación es que esas personas siguen rondando mis tierras y tememos que puedan atentar con nuestras vidas, y no vemos que la Fiscalía actúe al respecto. Sr. Presidente, tengo entendido que cuando estas personas se sometieron al proceso de Justicia y Paz, nos devolverían nuestras tierras... y por el contrario nos siguen amenazando. (pág. 60)

Asimismo, HRW (2013) "documentó amenazas graves y creíbles" contra más de 80 reclamantes y líderes de restitución de tierras en Bogotá y ocho departamentos más desde 2008, tratándose de una pequeña proporción del total de denuncias (pág. 8).

[48] Tribunal Superior Distrito Judicial de Antioquia, Sala Civil Especializada en Restitución de Tierras, Sala Uno, Proceso N.° 230013121001-2012-0001-00, 13 de febrero de 2013.

Por otra parte, desde 2008 se registraron más de 30 casos en siete departamentos donde se denuncia que las familias fueron desplazadas por Bacrim y, posteriormente, los predios terminaron en las familias de los perpetuadores (HRW 2013, pág. 10). La ONG también documentó 21 casos donde líderes reclamantes de tierras fueron asesinados en los departamentos de Antioquia, Cesar, Chocó, Córdoba y Sucre, "en 17 casos, hay evidencias […] de que las víctimas fueron atacadas debido a sus esfuerzos por recuperar tierras o activismo" (pág. 31).

Agréguese que la Defensoría del Pueblo informó al menos 71 asesinatos de líderes de restitución de tierras ocurridos en 14 departamentos entre 2006 y 2011 (HRW 2013, pág. 8). Si bien existen asimetrías entre las cifras presentadas dependiendo de la institución referenciada, lo claro es que el fenómeno de amenaza, intimidación, asesinato y desplazamiento por la propiedad de la tierra continúa latente por medio de bandas que en buena proporción se encuentran conformados a partir de exparamilitares, operando en territorios controlados anteriormente por estos.

Como corolario, la disputa por el territorio[49] se debe a objetivos como: ejercer el control de los corredores para traficar armas, movilizar y refugiar miembros, administrar los recursos naturales, "[instalar] o [aplicar] proyectos económicos de gran envergadura y [disponer] de tierras para el cultivo, procesamiento y tráfico de ilícitos, o […] incidir o relevar poderes locales para garantizar su lealtad a uno u otro grupo armado" (Acción Social 2005, citado por Instituto Popular de Capacitación [IPC] 2011, pág. 26); aclarando también que la apropiación "tiene como fin no sólo su apoderamiento per sé, sino también la obtención de control estratégico del territorio y, por ello, del poder económico y político" (IPC 2011, pág. 28), es decir, la tierra en sí mismo no es un fin, sino un mecanismo de control y de mediación económica.

Empero, en casos menos conocidos, algunos mandos medios y comandantes paramilitares se dieron al despojo de bienes con la finalidad de obtener usufructo de ellas (IPC 2011, pág. 32); de ahí, que también la dinámica de la propiedad territorial sea dinámica y no corresponda a utilidades únicas, por lo que muchos de los terrenos se encuentran en manos de testaferros y terceros vinculados. Precisamente, "el mantenimiento

[49] No correspondientes únicamente a actores criminales posteriores a los procesos de desmovilización, pero que si pueden destacarse como actores principales en el continuo proceso de despojo de tierras.

de la capacidad de coerción le permite a los testaferros y patrocinadores de las AUC mantener lo ganado y controlar territorio para los negocios del narcotráfico" (Romero y Arias 2011, pág. 7).

Ahora, debe aclararse que ni nacional ni departamentalmente se ha precisado la cantidad de tierras despojadas en el marco del conflicto armado interno, ni tampoco se ha clarificado cuantas hectáreas fueron apropiadas indebidamente por Bacrim, variable según fuente y metodologías; así, mientras la Contraloría General de la República estima unas 2.9 millones de hectáreas usurpadas, el Incoder calcula unas 4.9, y Acción Social eleva la cifra a 6.8 millones de hectáreas (ICP 2011, pág. 32). Lo cierto es que el fenómeno continuó después del proceso de desmovilización paramilitar donde las Bacrim jugaron un papel importante.

La ley ordena la entrega de los bienes que estuviesen a disposición de los procesados que hubiesen sido obtenidos ilícitamente, con la inconveniencia de que "la mayoría de estos se encuentran protegidos por el testaferrato o han sido legalizados por intermedio de notario corruptos o controlados por los mismos paramilitares" (Henao 2008, pág. 260)

3.5. Una mirada al cumplimiento de la ley

Un punto de observación consistiría en la paradoja a la cual se sometió, por parte de la Ley 975 y el gobierno, la extradición de altos mandos paramilitares; primordial considerando que el fenómeno paramilitar permeó la política local en todos los estratos y la Ley, a través de los mecanismos de verdad, debía desmantelar las redes de vínculos existentes entre políticos locales y grupos ilegales.

Se repasarán brevemente los efectos que tuvo la extradición de 23 paramilitares de alto rango por narcotráfico y su incidencia en el desmantelamiento de las redes político–criminales regionales ya que, para Montesquieu "si un ciudadano pudiera hacer lo que las leyes prohíben, ya no habría libertad, pues los demás tendrían igualmente esa facultad" (1984, pág. 167); exaltándose la política a nivel local, y ya no el equilibrio de poderes en las ramas del orden nacional.

En el 2008 el Presidente Álvaro Uribe, aduciendo incumplimiento de los paramilitares de alto nivel jerárquico por delinquir desde la cárcel en medio de Justicia y Paz, envió 14 en calidad de extraditados a EEUU[50], asestando un "golpe político" al esclarecimiento de la verdad (Henao 2008, pág. 152), pues estos poseían gran información sobre los vínculos entre políticos locales, autoridades civiles y militares, y políticos del gobierno nacional con los paramilitares.

El alegato del Presidente se fundamentó en que los paramilitares no estaban cumpliendo con lo dispuesto por la Ley 975 "cuando, todo lo contrario, estaban empezando a revelar quienes habían sido sus cómplices en el escenario político y quienes los habían apoyado económicamente en el mundo empresarial" (Henao 2008, pág. 153), en declaraciones que habían servido procesar algunos políticos en la denominada "Parapolítica". Entonces, la extradición sustentada sobre el incumplimiento a la Ley, correspondería más al afán de que los paramilitares no declararan a los organismos investigativos los vínculos existentes y encubrir el complejo entramado de relaciones entre los actores político, empresarial e ilegal.

López y Sevillano (2008) advierten que si bien en declaraciones libres los paramilitares han dado señales sobre quienes financiaban su actividad, no se ha logrado profundizar sobre los lazos existentes entre estos y las firmas económicas[51], pues la red de control local trascendió lo político y muchos gremios también colaboraron en la financiación y consolidación del fenómeno paramilitar regionalmente (pág. 70).

La Corte Suprema de Justicia en 2008, resaltando que esta extradición debía ajustarse a la verdad, justicia y reparación de las víctimas en Colombia, motivó una pugna con el Presidente, quien insinuó que la Corte estaba interfiriendo en las competencias de la rama ejecutiva y extraditó a 14 paramilitares de alto nivel. Como dinámica, "esa decisión, aunque legal, obstruyó de facto los procesos judiciales en los que participaban los paramilitares en Colombia y dejó en suspenso la garantía de los derechos de las víctimas" (López y Sevillano 2008, pág. 78).

El gobierno envió un mensaje ambiguo: la Corte Constitucional obligaba confesar la verdad so pena de perder los beneficios de la Ley 975 y recibir penas máximas, y con la

[50] Aunque habría más extraditados hasta el 2010 (Ver anexo 12).
[51] Un proceso relevante fue el iniciado por las cortes norteamericanas contra la empresa Chiquita Brands.

decisión de extraditar altos mandos "por empezar a confesar toda la verdad, [los paramilitares] se arriesgaban a ser extraditados si lo que decían comprometía la estructura política y económica que soporta al gobierno" (Henao 2008, pág. 21).

El desconocimiento de los alcances de la alianza político–paramilitar, reforzado por la extradición de los paramilitares tendría consecuencias contra la no repetición del fenómeno de fortalecimiento paramilitar en las regiones, reflejándose respectivamente en las relaciones entre los ciudadanos y la libertad política pues las "redes locales y regionales de poder no se han desarticulado. Se están recomponiendo, y la política pública para enfrentarlas no ha dado resultado" (Romero y Arias 2008, pág. 41). Para Reed (2011), no reconocer la continuidad de algunas dinámicas entre los antiguos paramilitares y las nuevas Bacrim decaería en un incompleto análisis del panorama, desconociendo la paralela continuidad con los servidores públicos, las FFMM y las élites regionales y locales (párr. 5)

En esta misma dirección, debe resaltarse que

> […] la naturaleza irregular de [las bandas criminales] facilita su inserción en la realidad local, como defensores de un orden o un régimen, en el cual confluyen intereses de seguridad (por delegación) con intereses locales, tanto lícitos como ilícitos. Así, su accionar es utilizado para regular sistemas económicos que no están protegidos por el monopolio de la fuerza del Estado y para controlar a las personas en ciertas zonas del país. (párr. 10)

Con la extradición de los principales líderes paramilitares como contribución al desconocimiento de estas redes en función de su desarticulación, un factor que afectaría la libertad de los ciudadanos radicaría en la configuración de un escenario de relaciones entre los mismos determinada por la confluencia entre alianzas de Bacrim, políticos y terceros que no permitirían suponer que no se viole la ley.

3.6. Una conclusión parcial a propósito de los factores que amenazarían la libertad política en Colombia en términos de Montesquieu

Las afectaciones a la vida, la propiedad, y la no garantía de un sometimiento al ordenamiento legal son factores que contribuirían a que, si bien en la política nacional y la institucionalidad haya existido un equilibrio entre los poderes, la libertad política según Montesquieu se vea alterada. Lo analizado en el tercer capítulo corresponde a la segunda

condición propuesta por el francés: la seguridad o percepción de seguridad de los ciudadanos, de forma que en la relación entre los mismos la vida y la propiedad no sean afectadas, regulándose en un marco de normas conocidas, aceptadas y participadas por todos.

Todo puede sintetizarse en tres premisas: *i)* en lo regional y local sigue prevaleciendo un orden basado en actividades ilícitas de grupos conformados proporcionalmente por exparamilitares (reincidentes y no desmovilizados), quienes determinan la vida y la propiedad de grupos sociales como reclamantes de tierras y de derechos, indígenas, afrodescendientes, fundamentados en la violencia, operando territorialmente donde se presumía que, tras la desmovilización paramilitar, sería restablecida la autoridad del Estado.

ii) Pueden concebirse estas dinámicas de control social, político y económico, responden a una serie de normas informales que prevalecen sobre la Constitución y la legislación, en un escenario sin una institucionalidad que las garantice, sucumbiendo ante los poderes de facto y sus disposiciones.

iii) Debe considerarse que siguen coexistiendo élites locales, Bacrim, FFMM y funcionarios públicos en redes y dinámicas tendientes a mantener el *statu quo,* en representación de intereses económicos y políticos que pueden fluctuar con base en la cooperación con fuertes grupos ilegales. La continuidad de estas redes de corrupción, tolerancia y compenetración entre actores hace que si bien existe una estructura legal que debería cohibir actividades ilegales, no permita pensar que no se violarán los derechos ni se altere la seguridad de los individuos. En definitiva, la privación de factores que favorezcan la seguridad y la legalidad, constituirían variables de alteración y amenaza a la libertad política en términos de Montesquieu.

CONCLUSIONES

Pese a formularse con siglos de antelación, los postulados de Charles de Montesquieu guardan pertinencia en buena medida, pues al ser categóricamente clásicos, si bien no puede esperarse estricta aplicación de detalles específicos, los supuestos generales han trascendido épocas y contextos. De su obra, pudo observarse una vigencia importante de tres premisas: la distribución social del poder; la necesidad de controles institucionales con arreglo a la constitución y las leyes; y la necesidad del cumplimiento y supeditación de las relaciones civiles a normas dispuestas y participadas en función de la seguridad, como condición para la libertad política.

Debe considerarse la poca trascendencia que el trasfondo de la distribución social del poder ha tenido si se le compara a los dispositivos de pesos y contrapesos. Al hablar de Montesquieu se rememora el principio básico constitucional liberal de equilibrio de poderes, desconociendo que éste es un mecanismo paralelo a la distribución social del poder para evitar los excesos de la concentración del mismo. Entonces resáltese que, según Montesquieu, no basta la existencia de controles entre ramas institucionales, siempre que estas estén determinadas por iguales actores o, por lo menos, con intereses afines entre sí sin ser los mismos. Valga la pena decir que uno de los aportes de esta monografía es una reivindicación del citado principio de distribución social, subsumido un poco al mecanismo institucional de control.

Por otra parte, una situación analizada consistió en si, como efecto, el poder acumulado derivaría en su uso indiscriminado, aún sobre la constitución y la ley. Se considera que el caso asumido cumplió con esclarecer las condiciones, pues, la tentativa de asignación de status político a grupos armados ilegales no correspondientes fue producto de haber tenido en cierto término la capacidad de hacerlo, tanto en la instancia gubernamental como legislativa. Esto pone de presente la necesidad imperativa de que el poder controle institucionalmente al poder detentado; oportunamente las cortes jurisdiccionales, en virtud del principio de equilibrio de poderes lograron que la constitución no se viera vulnerada en una doble vía: no permitiendo que las ramas adoptaran funciones que no les correspondían; y estableciendo límites a la capacidad legislativa de modificar las normas desnaturalizándolas.

Ello da pie para una aclaración pertinente y es que el equilibrio o desequilibrio de poderes no han de tener un carácter absoluto; queriendo decir que no puede considerarse que exista en todas las dinámicas de relación entre los poderes públicos un desequilibrio total en perjuicio de un equilibrio, o viceversa, sino que sobre un particular puede haber equilibrio y en otros asuntos diferentes existir una posición de disparidad.

Adicionalmente, si bien se trató de forma subsidiaria, la prioridad que para Montesquieu por la libertad política, debe tener el respeto por la constitución pone de relieve una problemática relacionada con los grupos que, por determinaciones ideológicas o de intereses, estén en contra de la misma. Ello subraya que, en la dimensión social, debe existir disposición al consenso constitucional pues debe procurarse que los arreglos sociales se regulen bajo normatividad y aceptación, evitando la toma de decisiones arbitrarias, valorando y protegiendo en mayor grado la libertad. De haber disenso constitucional, en todo caso debe resolverse de forma legal y supeditada a institucionalidad que garantice seguridad y reduzca al mínimo el arbitrio. Como ejemplo, recuérdese que la Corte Constitucional desaprobó la asignación de status de sediciosos a los paramilitares en la Ley 975 con el argumento de que la paz no lo justifica todo, como estar en contra de los derechos de las víctimas, pero, especialmente, por ir en contra de la constitucionalidad y la legalidad.

De otro lado, sobresale el acierto de Montesquieu al no limitar la garantía de la libertad al cumplimiento de la ley y la institucionalidad en el ámbito de lo eminentemente estatal. Considérese completamente válido que en esta acepción de libertad se contemple no sólo la relación ciudadano–gobierno sino también ciudadano–ciudadano, en términos de seguridad y amparo de la ley; así, reconociendo la importancia de los controles al poder en el Estado, la doble condición sobre la cual se fundamenta la libertad política permite ampliar su análisis de forma que, como el autor lo advierte, pueda ser que el poder esté atemperado en lo político, pero la libertad alterada en lo civil.

Empero, deben realizarse observaciones que alimenten el debate académico, pues, si bien lo desarrollado (especialmente en el capítulo final) toma como punto de partida la condición de libertad en Montesquieu relacionada con la seguridad, demuestra que hay fenómenos no contemplados por él, debiendo complementarse por producciones teóricas más contemporáneas. A ello alude la dinámica social posterior a la desmovilización

paramilitar, pues evidencia que no sólo el poder debe tener una examinación nacional, sino que cabe un enfoque regional que permita entender cómo, especialmente en un país como Colombia –donde se demarcada un centro y una periferia– haya poderes de facto que definan el destino de la vida y la propiedad de los individuos.

Por otra parte, un buen complemento a la teoría y postulados sobre la libertad en Montesquieu basada en la seguridad y la aplicación de las normas, consiste en la deferencia de la existencia de unas normas que subordinen las leyes, esto es, que se superpongan reglas determinadas informalmente sobre la legislación nacional, la cual se presume que ha de ser justa y acomodada a derecho y consenso[52].

Lo propuesto en la etapa final logra vislumbrar cómo las alianzas de actores paramilitares, élites regionales, funcionarios públicos y políticos son las que, a pesar de la existencia de unas normas de desmovilización y de reinserción a la vida civil de grupos armados ilegales, siguen imponiendo parámetros de convivencia entre civiles, neutralizando la acción de organizaciones sociales y de víctimas, de restitución de tierras, de minorías y, en general, de quien quiera legítimamente cambiar las dinámicas de lo político en las regiones.

Es un deber académico atender la posibilidad de que haya instituciones de facto que, sin legitimidad y autoridad concedida, detentan el orden, estructuran normas informales y disponen la existencia de alianzas para beneficiarse en detrimento de la libertad de las personas.

Montesquieu, su pensamiento y legado, son un ejemplo característico de una teoría clásica que, salvando los detalles más particulares y específicos determinados por un contexto y una realidad, logra definir planteamientos cuya esencia supera en buena medida el cambio propio de la evolución de las sociedades.

[52] Aunque no haya impedimentos para suponer que haya escenarios diametralmente opuestos.

BIBLIOGRAFÍA

Capítulos o artículos en libro

Aranguren Molina, M. (2001). El secuestro de mi padre. En M. Aranguren Molina, *Mi confesión* (págs. 38-56). Bogotá DC: Oveja Negra. Disponible en: http://es.scribd.com/doc/17478696/Mi-confesion-Carlos-Castano-por-Mario-Aranguen

Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación [CNRR] (2010). El concepto de despojo, las cifras y la medición. En CNRR, *La Tierra en Disputa. Memorias del despojo y resistencias campesinas en la Costa Caribe 1960-2010* (págs. 46-57). Colombia: CNRR-Grupo de Memoria Histórica & Ediciones Semana. Disponible en: http://www.oim.org.co/component/docman/doc_download/303-la-tierra-en-disputa-memorias-del-despojo-y-resistencias-campesinas-en-la-costa-caribe-1960-2010.html?Itemid=

Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación [CNRR]. (2007). Resumen ejecutivo y recomendaciones. En CNRR, *Disidentes, rearmados y emergentes: ¿bandas criminales o tercera generación paramilitar?* (págs. 5-11). Informe No. 1. Bogotá DC: Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación. Disponible en: http://www.oim.org.co/reconciliacion-y-reintegracion/1478-disidentes-rearmados-y-emergentes-bandas-criminales-o-tercera-generacion-paramilitar.html

Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación [CNRR]. (2007). Introducción. *Disidentes, rearmados y emergentes: ¿bandas criminales o tercera generación paramilitar?* (págs. 16-19). Informe No. 1. Bogotá DC: Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación. Disponible en: http://www.oim.org.co/reconciliacion-y-reintegracion/1478-disidentes-rearmados-y-emergentes-bandas-criminales-o-tercera-generacion-paramilitar.html

Federación Internacional de Derechos Humanos. (2007). Análisis del marco jurídico de la desmovilización paramilitar. En, *La desmovilización paramilitar, en los caminos de la Corte Penal Internacional* (págs. 17-34). Disponible en: http://www.fidh.org/IMG/pdf/Colombiejustice481-32007.pdf

Federación Internacional de Derechos Humanos. (2007). Balance del proceso de desmovilización paramilitar. En, *La desmovilización paramilitar, en los caminos de la Corte Penal Internacional* (págs. 35-56). Disponible en: http://www.fidh.org/IMG/pdf/Colombiejustice481-32007.pdf

Fundación Social (2006). Debates en la Comisión Primera del Senado. En Fundación Social, *Trámite de la Ley de Justicia y Paz. Elementos para el control ciudadano al ejercicio del poder político* (págs. 25-32). Bogotá DC: Fundación Social. Disponible en: http://www.proyectossocialesdirectos.org/index.php/es/publicaciones/category/7-construccion-de-la-paz?download=7:tramite-de-la-ley-de-justicia-y-paz&start=20

Fundación Social (2006). Ponencia alterna (coordinador de ponentes Senado: Rafael Pardo; y coordinador de ponentes Cámara: Gina Parody). En Fundación Social, *Trámite de la Ley de Justicia y Paz. Elementos para el control ciudadano al ejercicio del poder político* (págs. 139-141). Bogotá DC: Fundación Social.

Henao, A. (2008). Los golpes contra la parapolítica. En A. Henao, *Paramilitarismo, desmovilización y reinserción: La Ley de Justicia y Paz y sus implicaciones en la cultura política, la ciudadanía y la democracia en Colombia* (págs. 147-155). Bogotá DC: Universidad Nacional de Colombia.

Henao, A. (2008). La Ley de Justicia y Paz. En A. Henao, *Paramilitarismo, desmovilización y reinserción: La Ley de Justicia y Paz y sus implicaciones en la cultura política, la ciudadanía y la democracia en Colombia* (págs. 243-263). Bogotá DC: Universidad Nacional de Colombia.

Henao, A. (2008). Implementación de la LJP y resultados obtenidos en materia de verdad y de justicia. En A. Henao, *Paramilitarismo, desmovilización y reinserción: La Ley de Justicia y Paz y sus implicaciones en la cultura política, la ciudadanía y la democracia en Colombia* (págs. 281-291). Bogotá DC: Universidad Nacional de Colombia.

Human Rights Watch [HRW] (2013). Asesinatos, tentativas de asesinato y otros ataques. En HRW, *El riesgo de volver a casa* (págs. 31-35). Estados Unidos: Human Rights Watch. Disponible en: http://www.hrw.org/sites/default/files/reports/colombia0913spwebwcover.pdf

Human Rights Watch [HRW] (2013). I. Abusos generalizados contra reclamantes y líderes de restitución de tierras. En HRW, *El riesgo de volver a casa* (págs. 23-51). Estados Unidos: Human Rights Watch.

Human Rights Watch [HRW] (2013). Resumen. Recomendaciones. En HRW, *El riesgo de volver a casa* (págs. 1-20). Estados Unidos: Human Rights Watch.

Human Rights Watch [HRW] (2013). Tierra y vida en Urabá. En HRW, *El riesgo de volver a casa* (págs. 58-80). Estados Unidos: Human Rights Watch.

Instituto Popular de Capacitación [IPC] (2011). Cantidad de tierras abandonadas y despojadas. En IPC, *Realidades del despojo de tierras. Retos para la paz en Colombia* (págs. 32-37). Medellín: Pregón Ltda. Disponible en: http://www.ipc.org.co/agenciadeprensa/files/Realidades%20del%20despojo%20de%20tierras_IPC_2012.pdf

Instituto Popular de Capacitación [IPC] (2011). El despojo no es un fin en sí mismo. En IPC, *Realidades del despojo de tierras. Retos para la paz en Colombia* (págs. 31-32). Medellín: Pregón Ltda.

Instituto Popular de Capacitación [IPC] (2011). Los intereses en juego en las regiones. En IPC, *Realidades del despojo de tierra. Retos para la paz en Colombia* (págs. 25-31). Medellín: Pregón Ltda.

Montesquieu, C. (1984). De las leyes que dan origen a la libertad política en relación con el ciudadano. En C de. Montesquieu, *Del espíritu de las leyes* (págs. 197-219). Madrid: Sarpe.

Montesquieu, C. (1984). De las leyes que dan origen a la libertad política en su relación con la constitución. En C de. Montesquieu, *Del espíritu de las leyes* (págs. 166-197). Madrid: Sarpe.

Montesquieu, C. (1984). Las leyes que da el legislador deben estar en relación con el principio de gobierno. En C de. Montesquieu, *Del espíritu de las leyes* (págs. 68-93). Madrid: Sarpe.

Ovalle, J. (1982). El principio de la división de poderes y el Poder Judicial federal. En J. Ovalle. (Comp), *Temas y problemas de la administración de justicia en México* (págs. 181-210). México DF: Universidad Nacional Autónoma de México. Disponible en: http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/2/982/8.pdf

Quinche, M. (2009). La elusión constitucional mediante los decretos reglamentarios de las leyes. El cumplimiento de los elementos de la elusión constitucional. En M. Quinche, *La elusión constitucional. Una política de evasión del control constitucional en Colombia* (págs. 202-205). Bogotá DC: Universidad del Rosario. Disponible en: http://books.google.com.co/books?id=BIxe8e_3D3oC&printsec=frontcover&hl=es&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false

Quinche, M. (2009). La manipulación normativa en el nivel reglamentario. En M. Quinche, *La elusión constitucional. Una política de evasión del control constitucional en Colombia* (págs. 190-201). Bogotá DC: Universidad del Rosario.

Silva-Herzog Márquez, J. (2001). Las esferas. En J. Silva-Herzog Márquez, *Las esferas de la democracia* (págs. 25-54). México DF: Instituto Federal Electoral. Disponible en: http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/libro.htm?l=504

Valencia, L. (2007a). Los caminos de la alianza entre los paramilitares y los políticos. En Corporación Nuevo Arco Iris [CNAI], *Parapolítica: la ruta de la expansión paramilitar y los acuerdos políticos*. Bogotá DC: Intermedio.

Artículos en publicaciones periódicas académicas

Arias, A. (2012). Las Bacrim retan a Santos. En *Arcanos*, (17) 4-35. Disponible en: http://www.arcoiris.com.co/wp-content/uploads/2011/arcanos/ARCANOS_17_FINAL.pdf

Barreto-Rozo, A. (2011). El proyecto constitucional de la separación de poderes en el Estado colombiano: apuntes sobre su desenvolvimiento a lo largo del siglo XX. En *Vniversitas*, 122, 213-260. Disponible en: http://www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/vniver/cont/122/cnt/cnt9.pdf

Fuentes, C. (2011). Montesquieu: Teoría de la Distribución Social del Poder. En *Revista de Ciencia Política*, 31 (1), 47-61. Disponible en: http://www.redalyc.org/pdf/324/32419207003.pdf

García, R. (1986). Problemática de la división de poderes en la actualidad. En *Revista de Estudios Políticos (Nueva Época)*, (53), 175-190. Disponible en: http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=26919&orden=0&info=link

Grajales, J. (2011). El proceso de desmovilización de los paramilitares en Colombia: entre lo político y lo judicial. En *Desafíos*, 23 (2), 149-194. Disponible en: http://revistas.urosario.edu.co/index.php/desafios/article/download/1805/1608

Hernández, J. (2013). La Constitución de Colombia de 1991 y sus enemigos. El fracaso del consenso constitucional. En *Colombia Internacional 79*, 49-76. Disponible en: http://colombiainternacional.uniandes.edu.co/datos/pdf/descargar.php?f=./data/Revista_No_79/n79a03.pdf

López, C., & Sevillano, Ó. (2008). Balance político de la parapolítica. En *Arcanos*, (14), 62-88. Disponible en: http://www.arcoiris.com.co/wp-content/uploads/2011/arcanos/revista_ARCANOS_14.pdf

Romero, M., Arias, A. (2011). A diez años del inicio del Plan Colombia: Los herederos de las AUC, la geografía del narcotráfico y la amenaza de nuevos carteles. En: *Arcanos*, (16), 4-27. Disponible en: http://www.arcoiris.com.co/wp-content/uploads/2011/Arcanos/revista_ARCANOS_16.pdf

Romero, M., Arias, A. (2010). Sobre paramilitares, neoparamiliares y afines: Crecen sus acciones, ¿qué dice el gobierno? En *Arcanos*, (15), 34-45. Disponible en: http://www.arcoiris.com.co/wp-content/uploads/2011/arcanos/revista_ARCANOS_15.pdf

Romero, M., Arias, A. (2008). "Bandas Criminales", Seguridad Democrática y corrupción. En *Arcanos*, (14), 40-51. Disponible en: http://www.arcoiris.com.co/wp-content/uploads/2011/arcanos/revista_ARCANOS_14.pdf

Uprimny, R., Saffon, M. (2008). Usos y abusos de la Justicia Transicional en Colombia. En *Anuario de Derechos Humanos 2008*, (4) 165-195. Disponible en: http://www.anuariocdh.uchile.cl/index.php/ADH/issue/view/1132

Valencia, G., Mejía, C. (2010). Ley de Justicia y Paz, un balance de su primer lustro. En: *Perfil de Coyuntura Económica*, (15), 59-77. Disponible en: http://aprendeenlinea.udea.edu.co/revistas/index.php/coyuntura/article/viewFile/7663/7086

Artículos en publicaciones periódicas no académicas

Análisis 365, (26 de septiembre de 2012). *Congresistas confiesan: Uribe sabía que paramilitares apoyarían su campaña electoral*. Disponible en http://www.analisis365.com/2012/09/26/congresistas-confiesan-uribe-sabia-que-paramilitares-apoyarian-su-campana-electoral/

Caracol Radio, (11 de mayo de 2012). *Apoyé la reelección de Uribe con propaganda y dinero: Salvatore Mancuso.* Disponible en: http://www.caracol.com.co/noticias/judicial/apoye-la-reeleccion-de-uribe-con-propaganda-y-dinero-salvatore-mancuso/20120511/nota/1686237.aspx

Corporación Nuevo Arco Iris [CNAI], (31 de enero de 2013). *La maldición de Guacharacas, la hacienda de los Uribe Vélez*. Disponible en: http://www.arcoiris.com.co/2013/01/la-maldicion-de-guacharacas-la-hacienda-de-los-uribe-velez/

El Colombiano, (3 de noviembre de 2013). *Bandas salpican a 208 funcionarios.* Disponible en: http://www.elcolombiano.com/BancoConocimiento/B/bandas_salpican_a_208_funcionarios/bandas_salpican_a_208_funcionarios.asp

El Espectador, (2 de junio de 2013). *Se abre capítulo bacrimpolítica*. Disponible en: http://www.elespectador.com/noticias/judicial/articulo-425485-se-abre-capitulo-bacrimpolitica

El País, (12 de marzo de 2011). *La 'Bacrimpolítica' amenaza las elecciones de octubre*. Disponible en: http://www.elpais.com.co/elpais/colombia/bacrimpolitica-amenaza-elecciones-octubre

El Tiempo, (17 de septiembre de 2013). *¿Por qué el DAS pidió perdón por un crimen de los 'paras'?/Análisis.* Disponible en: http://www.eltiempo.com/justicia/ARTICULO-WEB-NEW_NOTA_INTERIOR-13068117.html

Evans, M. Los documentos de Chiquita. En *Verdad Abierta*, (7 de abril de 2011). Disponible en: http://www.verdadabierta.com/component/content/article/48-despojo-de-tierras/3173-los-documentos-de-chiquita

Evans, M. The Chiquita Papers. En *The National Security Archive*, (7 de abril de 2011). Disponible en: http://www2.gwu.edu/~nsarchiv/NSAEBB/NSAEBB340/index.htm

Medina, R. Mancuso: 'El paramilitarismo de Estado sigue vigente'. *En Terra Colombia*, (3 de abril de 2008). Disponible en: http://www.terra.com.co/actualidad/articulo/html/acu10230.htm

RCN Noticias, (29 de julio de 2013). *Comienzan indagaciones por la 'Bacrimpolítica'*. Disponible en: http://www.noticiasrcn.com/nacional-justicia/comienzan-indagaciones-bacrimpolitica

RCN Radio, (16 de noviembre de 2012) *Álvaro Uribe ordenó instruir personal para las convivir en el país: Alias 'JL'*. Disponible en: http://www.rcnradio.com/noticias/alvaro-uribe-ordeno-instruir-personal-para-las-convivir-en-el-pais-alias-jl-33321

Reed, M. Bacrim: Trampa conceptual. En El Colombiano (4 de enero de 2011). Disponible en:

http://www.elcolombiano.com/BancoConocimiento/B/bacrim_trampa_conceptual_(1)/bacrim_trampa_conceptual_(1).asp

Resumen de país. Colombia. En *Human Rights Watch [HRW]*, (enero de 2012). Págs. 8. Disponible en: http://www.hrw.org/sites/default/files/related_material/colombia_2012_sp.pdf

Semana, (14 de enero de 2014). *Investigación contra Uribe quedó en firme*. Disponible en: http://www.semana.com/nacion/articulo/alvaro-uribe-afrontara-otra-investigacion-por-autodefensas/370900-3

Semana, (19 de diciembre de 2009). *Las 'chuza-DAS'*. Disponible en: http://www.semana.com/nacion/articulo/las-chuza-das/111197-3

Semana, (15 de mayo de 2007a). *Mancuso dice que los generales Rito Alejo del Rio, Martín Carreño e Iván Ramírez ayudaron a expandir el paramilitarismo*. Disponible en: http://www.semana.com/on-line/articulo/mancuso-dice-generales-rito-alejo-del-rio-martin-carreno-ivan-ramirez-ayudaron-expandir-paramilitarismo/85930-3

Semana. (11 de septiembre de 2005). *Votaciones atípicas en las elecciones del Congreso del 2002*. Disponible en: http://www.semana.com/on-line/articulo/votaciones-atipicas-elecciones-congreso-del-2002/74746-3

Verdad Abierta, (27 de septiembre de 2012a). *Mancuso, Uribe, las convivir y los doce apóstoles*. Disponible en: http://www.verdadabierta.com/despojo-de-tierras/4234-mancuso-sigue-hablando-de-uribe

Verdad Abierta, (24 de agosto de 2012b). *Caja menor de los 'paras' financió campaña de Uribe: 'El Iguano'*. Disponible en: http://www.verdadabierta.com/despojo-de-tierras/4175-campana-de-uribe-se-financio-con-la-caja-menor-de-los-paras

Verdad Abierta, (21 de septiembre de 2011b). *Los 'paras' que han salpicado a Álvaro Uribe*. Disponible en: http://www.verdadabierta.com/despojo-de-tierras/3562-los-paras-que-han-salpicado-a-alvaro-uribe

Verdad Abierta, (09 de septiembre de 2011a). *"Vicente Castaño fue cerebro de la expansión 'para'": 'Vecino'*. Disponible en: http://www.verdadabierta.com/component/content/article/36-jefes/3535-vicente-castano-fue-cerebro-de-la-expansion-para-vecino/

Verdad Abierta, (29 de abril de 2010a). *Las AUC apoyaron la campaña de Uribe en el 2002: Mancuso*. Disponible en: http://www.verdadabierta.com/justicia-y-paz/2420-emision-en-vivo-del-juicio-a-jorge-noguera

Verdad Abierta, (18 de enero de 2010b). *La historia detrás del 'Pacto de Ralito'*. Disponible en: http://www.verdadabierta.com/las-victimas/2103-la-historia-detras-del-del-pacto-de-ralito

Verdad Abierta, (06 de junio de 2005). *Habla Vicente Castaño*. Disponible en: http://www.verdadabierta.com/victimarios/los-bloques/328-habla-vicente-castano

Otras publicaciones

Castaño, V. (2006). *Historia de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá ACCU*. Documento encontrado en memoria USB por la Fiscalía General de la Nación. Disponible en: http://www.verdadabierta.com/despojo-de-tierras/4009

Codhes. (15 de febrero de 2011). *¿Consolidación de qué?* Boletín informativo de la Consultoría para los Derechos Humanos y el desplazamiento No. 77. Disponible en: http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Informe_completo_115.pdf

Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo. (2006). *Decreto 4436 de 2006 revive la condición de delincuentes políticos a los grupos paramilitares desconociendo la Constitución Política.* Documento de sitio web. Disponible en: http://www.colectivodeabogados.org/Decreto-4436-de-2006-revive-la

Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo. (2006). *Consolidación paramilitar e impunidad en Colombia*. Documento de sitio web. Disponible en: http://www.colectivodeabogados.org/CONSOLIDACION-PARAMILITAR-E

Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo. (2010). *La verdad sobre el proceso de desmovilización paramilitar y su aporte a la paz*. Documento de sitio web. Disponible en: http://www.colectivodeabogados.org/La-verdad-sobre-el-proceso-de#nh4

Comisión Colombiana de Juristas. (2005). *Aprobada ley de impunidad en Colombia. Sin Paz y sin Justicia*. Boletín número 6. Disponible en: http://www.coljuristas.org/documentos/boletines/bol_n6_jyp.pdf

Corte Constitucional, (18 de mayo 2006) Sentencia C-370 de 2006. Magistrados ponentes: Manuel José Cepeda Espinoza; Jaime Córdoba Triviño; Rodrigo Escobar Gil; Marco Gerardo Monroy Cabra; Álvaro Tafur Galvis; Clara Inés Vargas Hernández. Disponible en: http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2006/c-370-06.htm

Corte Suprema de Justicia, (2007) Sala de Casación Penal, sentencia del 11 de julio de 2007, segunda instancia; Magistrados ponentes: Yesid Ramírez Bastidas; Julio Enrique Socha Salamanca. Disponible en: http://www.derechos.org/nizkor/colombia/doc/sedicion.html

Cubides, F. (1997). *Los paramilitares y su estrategia*. Documento de trabajo. Disponible en:

http://economia.uniandes.edu.co/investigaciones_y_publicaciones/CEDE/Publicaciones/documentos_cede/documentos_de_paz_publica

Fiscalía General de la Nación. (2014). Unidad Nacional de Fiscalías para la Justicia y la Paz. Base de datos de los postulados a la Ley 975. Disponible en: http://www.fiscalia.gov.co/jyp/definicion/consulta-postulados/

Gobierno Nacional & AUC. (15 de julio de 2003). *Acuerdo de Santa Fe de Ralito*. Acuerdo de desmovilización Disponible en: http://estaticos.elmundo.es/documentos/2003/04/guerras_olvidadas/santafederalito.pdf

Indepaz. (2012). *Sobre las cifras oficiales*. Documento de sitio web. Disponible en: http://www.indepaz.org.co/wp-content/uploads/2012/05/Sobre-las-cifras-oficiales.pdf

Ley 975 de Justicia y Paz (2005) Compilación Normativa y Jurisprudencia, Fiscalía General de la Nación. Disponible en: http://www.fiscalia.gov.co/jyp/wp-content/uploads/2012/05/Compilaci%C3%B3n-Normativa-2010.pdf

Marín, I. (2007). *Grupos paramilitares y delito político en Colombia*. Documento de sitio web. Disponible en: http://www.viva.org.co/cajavirtual/svc0079/articulo01.pdf

Observatorio de Procesos de Desarme, Desmovilización y Reintegración. (2014). *DDR en cifras*. Cuadros de cifras. Disponible en: http://www.observatorioddr.unal.edu.co/cifrasDDR.html

Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y DIH. (2011). *Informe Anual de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario 2010*. Bogotá DC. Informe. Disponible en: http://www.derechoshumanos.gov.co/Observatorio/Paginas/Observatorio.aspx.

Oficina Alto Comisionado para la Paz. (2006). *Proceso de Paz con las Autodefensas. Informe Ejecutivo*. Bogotá DC: Oficina Alto Comisionado para la Paz. Informe. Disponible en: http://www.acnur.org/t3/uploads/pics/2258.pdf?view=1

Oficina Alto Comisionado para la Paz. (2005). *Esquema Ley de Justicia y Paz.* Documento didáctico. Disponible en. http://www.fiscalia.gov.co:8080/Documentos/Esquema_Ley975_Justicia_Paz.pdf

Organización Memoria y Dignidad. (2010). *Listado de jefes paramilitares extraditados a Estados Unidos*. Lista. Disponible en: http://memoriaydignidad.org/memoriaydignidad/images/extradicionysussecuelas/para-saber-mas/investigaciones-y-publicaciones-PCS/5-listado-paramilitares-extraditados.pdf

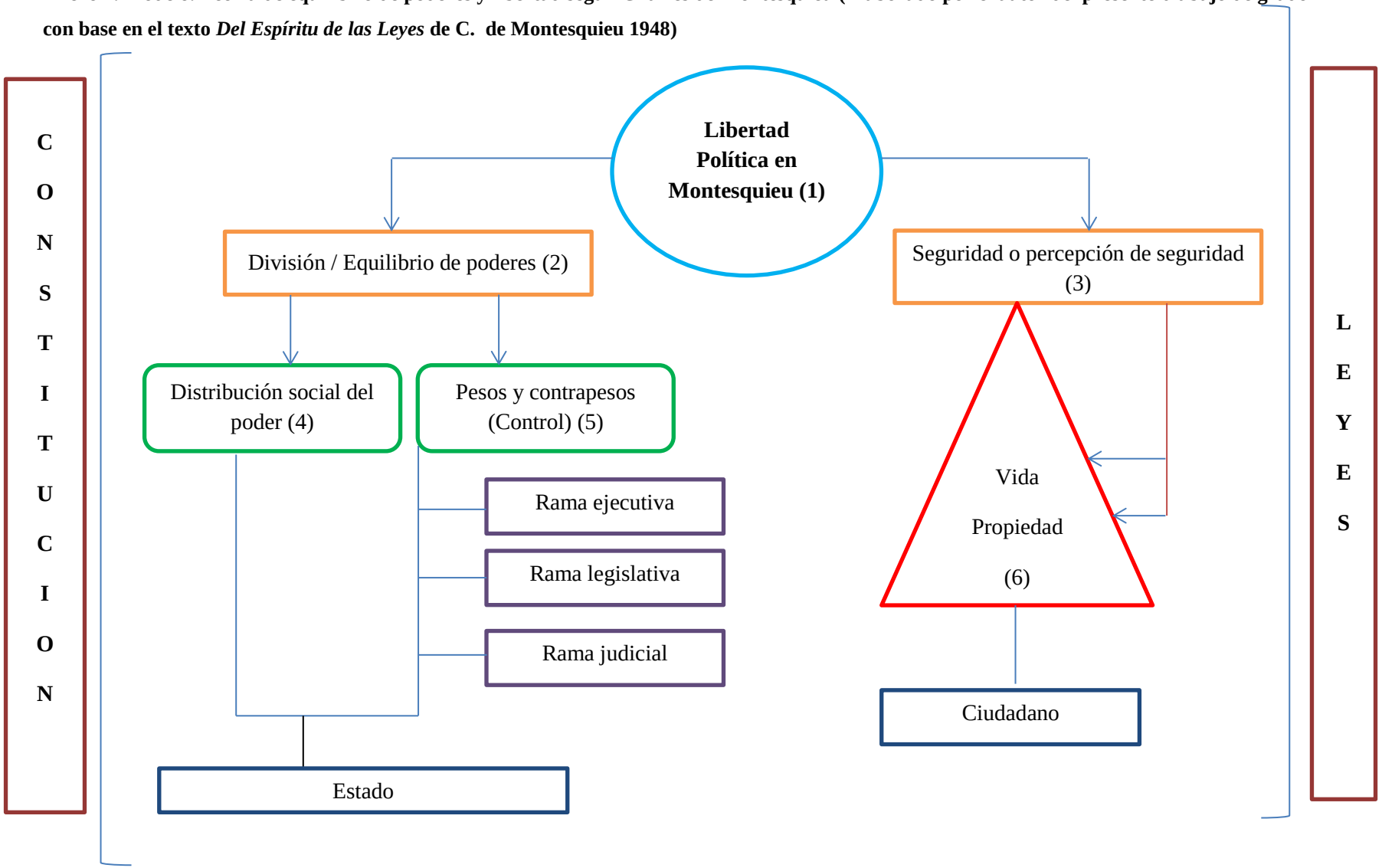
Procuraduría General de la Nación. (2007) *Conceptos básicos acerca de la Ley 975 de 2005 (Justicia y Paz) y los derechos de las víctimas.* Manual. Bogotá DC. Disponible en: http://www.procuraduria.gov.co/portal/media/file/descargas/victimas_2007/conceptosbasicos_ley975.pdf

Texto del Pacto de Ralito. En *Semana*, (19 de enero de 2007b). Disponible en: http://www.semana.com/on-line/articulo/texto-del-acuerdo-ralito/83002-3

Valencia, L. (2007b). Los caminos de la alianza entre los paramilitares y los políticos. Documento de sitio web. Disponible en: http://www.internal-displacement.org/8025708F004CE90B/(httpDocuments)/32203708412384D9C12572C800372C15/$file/Informe+final+para-pol%C3%ADtica.pdf

ANEXOS

Anexo 1. Modelo. Teoría de equilibrio de poderes y libertad según Charles de Montesquieu (Elaborado por el autor del presente trabajo de grado con base en el texto *Del Espíritu de las Leyes* de C. de Montesquieu 1948)



Anexo 2. Documento. Teoría de equilibrio de poderes y libertad según Charles de Montesquieu (Elaborado por el autor del presente trabajo de grado con base en el texto *Del Espíritu de las Leyes* de C. de Montesquieu 1948)

La **(1)** libertad política consiste en "hacer lo que se debe querer y en no estar obligado a hacer lo que no se debe querer" (Montesquieu 1984, pág. 167), es decir, estar sometido a un régimen con arreglo a la constitución y a las leyes, de manera que no exista quien pueda violar las leyes, así como tampoco usar el poder para cometer acciones indebidas en beneficio particular.

De igual manera, la libertad política en Montesquieu requiere de dos condiciones para poder concebirse, **(2)** la existencia de una división de los poderes del Estado (que tradicionalmente han sido ejecutivo, legislativo y judicial) y la efectividad de un equilibrio entre los mismos de forma que "el poder frene el poder" (1984, pág. 168); y **(3)** la seguridad o percepción que cada uno tenga de su seguridad.

Puede decirse, con respecto a la primera condición dispuesta por Montesquieu, que esta corresponde a la determinación de las acciones de quienes detentan el poder de las ramas del Estado; por parte de la segunda, esta se vincula con la relación existente entre los ciudadanos. El equilibrio de poderes no sólo consiste en la existencia de unas ramas sino que, a su vez, deben guardar para si un par de características que hagan que los poderes operen de acuerdo a lo que el autor considera "una obra maestra de legislación" (Montesquieu 1984, pág. 89), esto es, las disposiciones de la constitución y las leyes.

Así las cosas, ha de considerarse una de estas características como la **(4)** distribución social del poder (Fuentes 2011), o lo que es equivalente a la idea expresada por Montesquieu (1984) cuando refiere que "todo estaría perdido si el mismo hombre, el mismo cuerpo de personas principales, de los nobles o del pueblo, ejerciera los tres poderes: el de hacer leyes, el de ejecutar las resoluciones públicas y el de juzgar los delitos o las diferencias entre los particulares" (pág. 169). Esto implica, dicho de otra manera, que no deben abarcar para si el control de más de una rama del poder –mucho menos de las tres– los mismos actores o, así sean distintos, si estos tienen una afinidad importante de intereses, sobre todo teniendo en cuenta que para Montesquieu (1984) "es una experiencia eterna, que todo hombre que tiene poder siente inclinación de abusar de él, yendo hasta donde encuentra límites" (pág. 168).

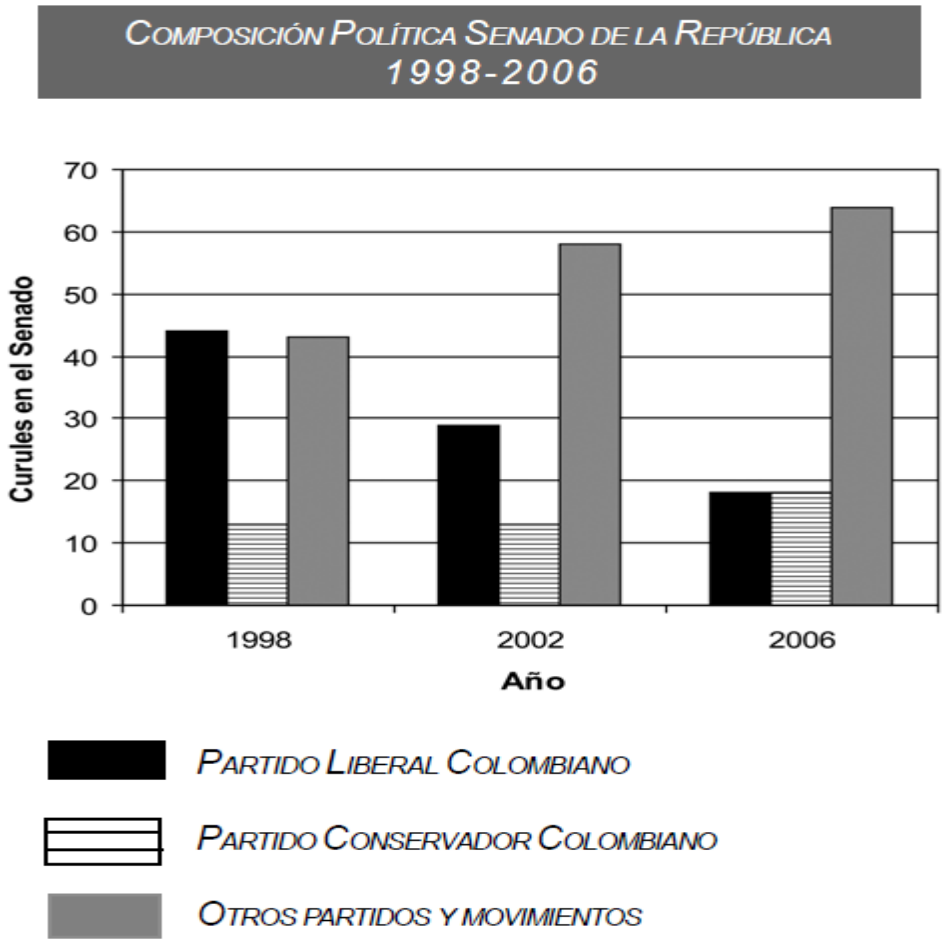
Por otra parte, la siguiente característica del equilibrio de poderes a la que hace referencia Montesquieu es al bien conocido mecanismo de control denominado **(5)** pesos y contrapesos, lo cual hace referencia a que los poderes estén atemperados e institucionalmente vigilados entre sí; esto quiere decir que, si bien la constitución y la ley establecen el marco dentro del cual los individuos –y por ende el poder del Estado– deben manejarse, dado el caso de degenerar en abuso de poder para beneficio particular, las mismas instituciones deben actuar para contrarrestar y limitar los excesos. De ello debería valerse el orden político para mantenerse y, así mismo, garantizar a los ciudadanos de que el poder del Estado no decaerá en una alteración de las normas para beneficios privados, afectando su libertad.

Ahora bien, retomando la segunda condición de Montesquieu para la existencia de la libertad, esta se sustenta bajo la base de que "pueda ser que la constitución sea libre y el ciudadano no lo sea, o que el

ciudadano sea libre y la constitución no. En tales casos la constitución será libre de derecho y no de hecho, y el ciudadano será libre de hecho y no de derecho" (Montesquieu 1984, pág. 198). Ello hace referencia no a la actividad del poder del Estado, sino a la sujeción de las relaciones entre los hombres a derecho, puesto que de ello devendría la seguridad o la opinión que cada quien tenga de su seguridad, sobre todo por cuanto el hombre debe "vivir con seguridad frente a los posibles ataques de los vecinos […] contra su vida, dignidad y propiedad" (García Macho 1986, pág. 176).

De acuerdo a lo dicho, se puede determinar entonces que según el pensamiento de Montesquieu la libertad política está sujeta no sólo al control del poder del Estado sino, también, a la seguridad de la existencia de unos arreglos sociales que garanticen que la vida, la propiedad y, en términos generales, la seguridad no se verá alterada. En últimas, la libertad política se encuentra supeditada a la existencia de un marco legal donde la constitución y las leyes no sólo estén dispuestas para neutralizar beneficios exclusivos sino que, además, sean de absoluto cumplimiento, tanto para el Estado y sus instituciones, como para todos y cada uno de los individuos dentro de una sociedad.

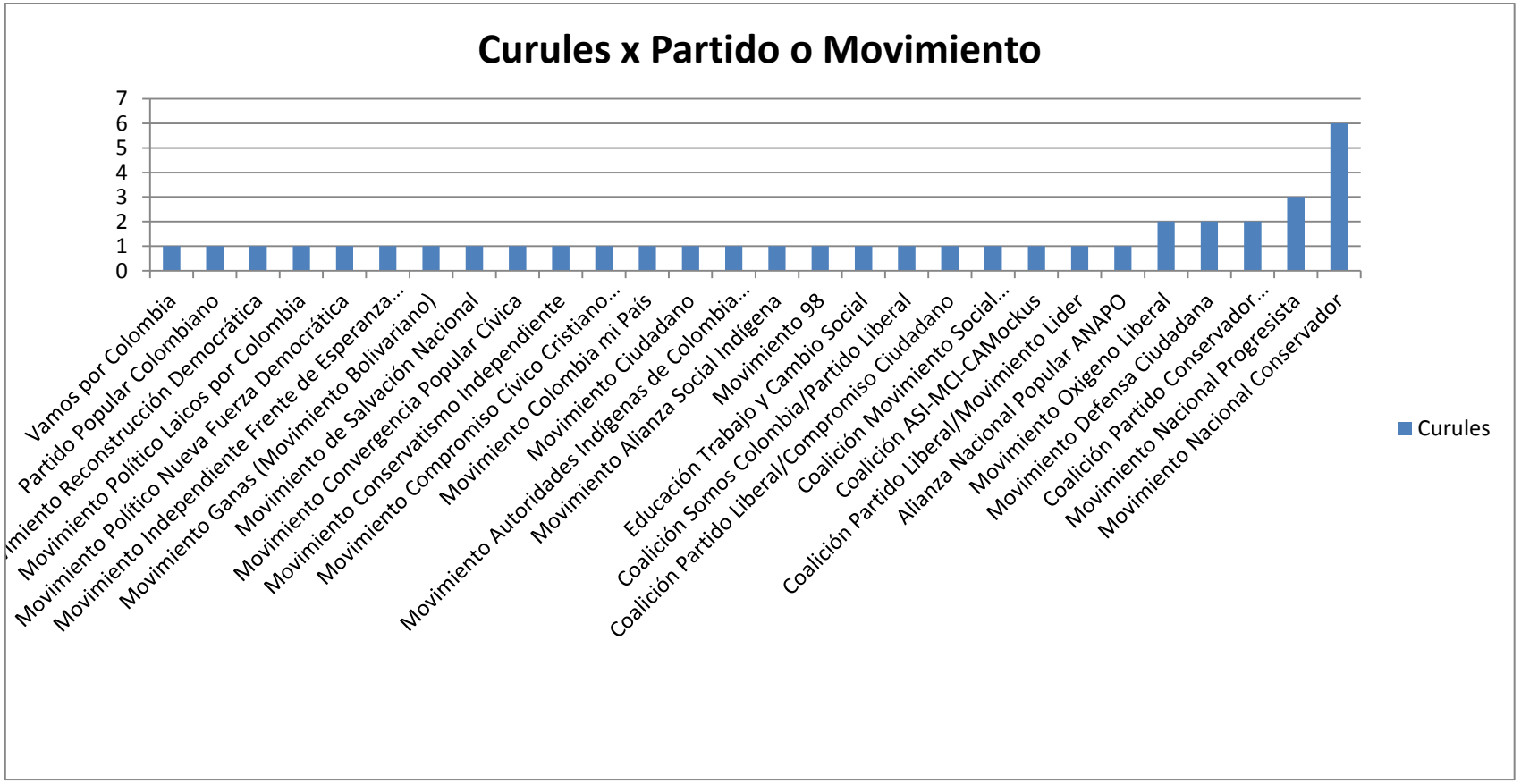
Anexo 3. Gráfica. Composición política Senado de la República 1998 – 2006



(Observatorio del Conflicto Armado, citado en Valencia 2007, pág. 21)

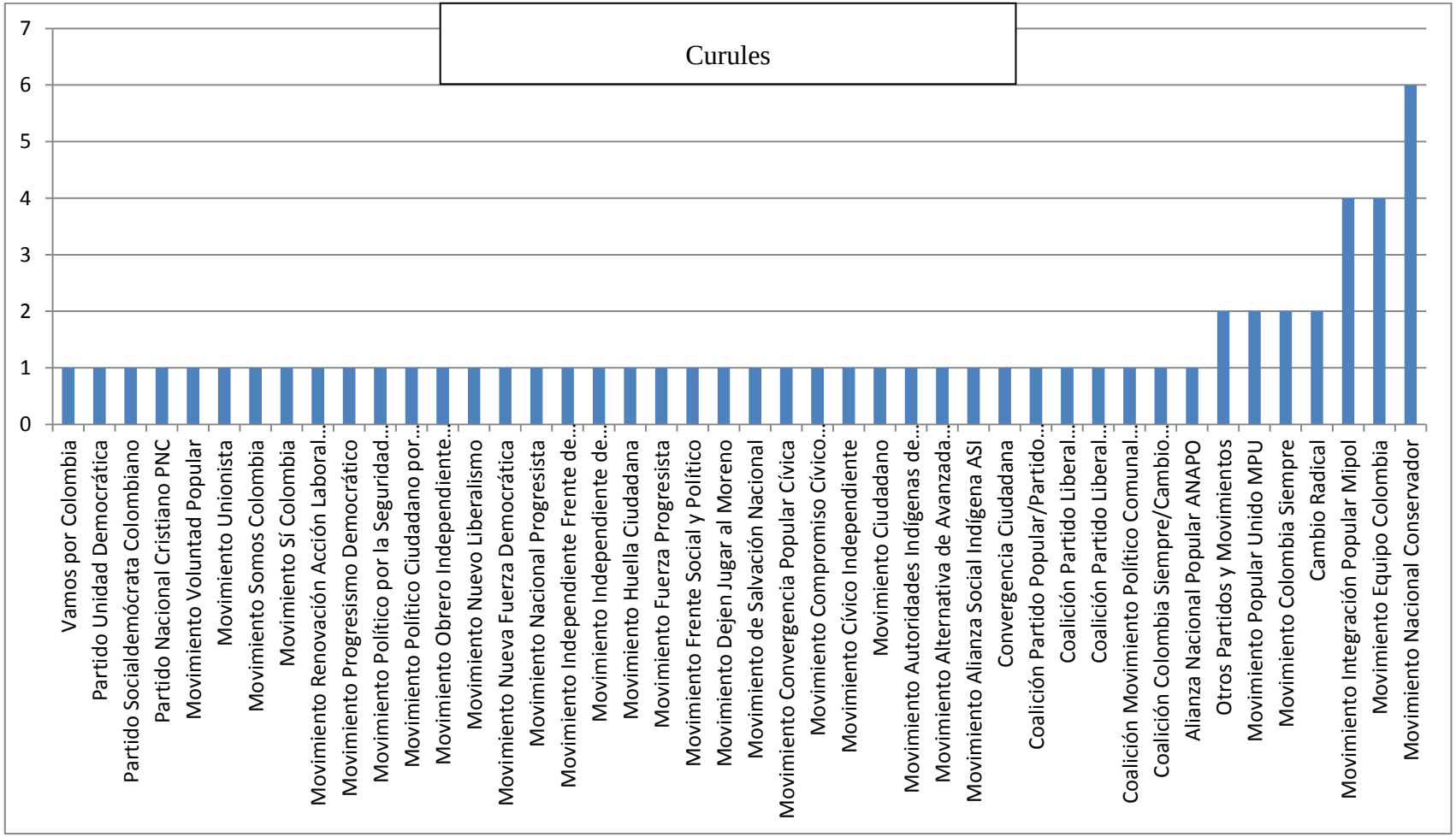
Puede observarse el crecimiento drástico de la cantidad de curules obtenidas por terceros partidos a partir del 2002 para el Senado de la República, lo que implica un descenso histórico en la representación de los dos partidos tradicionales en Colombia

Anexo 4. Gráfica. Terceros partidos y movimientos en el Senado (1998-2002)



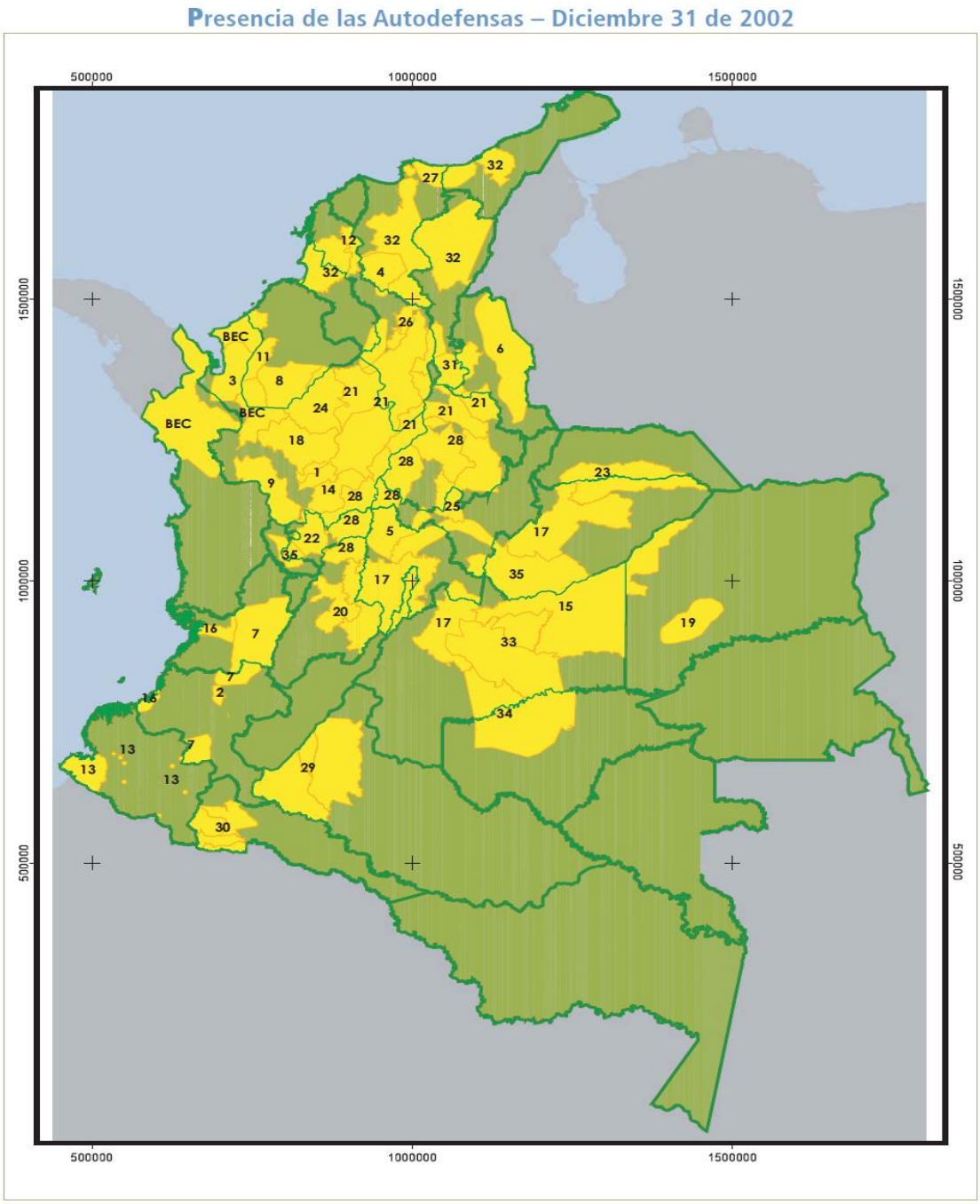
Elaboración propia a partir de datos encontrados en Valencia 2007, pág. 19

Anexo 5. Gráfica. Terceros partidos y movimiento en el Senado (2002-2006)



Elaboración propia a partir de datos encontrados en Valencia 2007, pág. 20

Anexo 6. Mapa. Presencia de los paramilitares en las regiones colombianas. 31 de diciembre de 2002



(Oficina Alto Comisionado para la Paz 2006, pág. 11)

Anexo 7. Lista. Senadores y Representantes a la Cámara periodo 2006-2010 elegidos en zonas de influencia y control paramilitar

Senadores y Representantes a la Cámara periodo 2006 - 2010
Elegidos en zonas de influencia y control paramilitar

Senadores

Partido Social de Unidad Nacional
Jairo Enrique Merlano Fernández
Manuel Guillermo Mora
Mauricio Pimiento
Piedad Zuccardi
Zulema Jattin
Carlos Cárdenas

Partido Cambio Radical
Luís Carlos Torres
Rubén Darío Quintero
Miguel Pinedo Vidal
Javier Cáceres Leal
Antonio Cristo Guerra de la Espriella
David Char Navas
Reginaldo Enrique Montes Álvarez

Partido Convergencia Ciudadana
Luís Alberto Gil Castillo
Juan Carlos Martínez Sinisterra
Oscar Josué Reyes
Luís Eduardo Vives Lacouture
Carlos Emiro Barriga Peñaranda
Gabriel Acosta Bendeck

Partido Conservador Colombiano
William Alfonso Montes Medina
Ciro Ramírez Pinzón
Juan Manuel Corzo Román
Julio Alberto Manzur Abdal

Movimiento Alas Equipo Colombia
Álvaro Araujo Castro
Oscar Suárez Mira
Jorge Ballesteros

Partido Colombia Democrática
Mario Uribe Escobar
Álvaro Alfonso García Romero
Miguel Alfonso de la Espriella

Partido Colombia Viva
Habid Meheg Marún
Dieb Nicolás Maloof Cuse

Partido Liberal de Colombia
Juan Manuel López Cabrales
Guillermo León Gaviria Zapata

Representantes

Movimiento Alas Equipo Colombia
Álvaro Morón Cuello
Ricardo Chajin Florián
Hernando Betancourt Hurtado

Apertura Liberal
Héctor Julio Alfonso López
Fernando Tafur Díaz
Jorge Luís Caballero Caballero
Rodrigo Roncallo Faniño
Jorge Julián Silva Meche

Partido Cambio Radical
Néstor Homero Cotrina
William de Jesús Ortega Roja
Tarquino Pacheco Camargo
Oscar L. Wilches Carreño
Sandra Arabella Velásquez
Pedro Pardo Rodríguez
Fabio Arango Torres

Partido Colombia Democrática
William Vélez Mesa
Erik Julio Morís Tobada

Partido Conservador
Pedrito Pereira Caballero
Alfredo Ape Cuello Baute
José de los Santos Negrete
Bladimiro Nicolás Cuello Daza
Alfonso Antonio Campo Escobar

Jorge Alberto García-Herreros
Jairo Díaz Contreras
Ciro Antonio Rodríguez Pinzón
Marco Tulio Leguizamon Roa

Partido Convergencia Ciudadana
José Vicente Lozano Fernández
Juan Gabriel Diaz Bernal
Fabiola Olaya Rivera
Alfonso Riaño Castillo
José Manuel Herrera Cely

Movimiento Renovación Acción Laboral – Moral-
Karelly Patricia Lara Vence

Movimiento Popular Unido –MPU-
Carlos Arturo Quintero Marín
Orlando Duque Quiroga

Partido de Acción Social
Jairo A. Fernández Queseen

Partido Social de Unidad Nacional
Miguel Amin Escaf
Karime Mota y Marad
Miguel Ángel Rangel Sosa
Elías Raad Hernández
Bernardo Miguel Elías Vidal
Eduardo Augusto Benítez M.
Carlos Augusto Celis Gutiérrez

Partido Liberal
Carlos Arturo Piedrahita Cárdenas
Mauricio Parodi Díaz
Lidio Arturo García Turbay
Musa Besaile Fayad
Dumith Antonio Nader Cura
Fabio Raúl Amin Saleme
Diego Patiño Amariles
Juan Carlos Valencia Montoya

(Valencia 2007, págs 35-36)

Anexo 8. Tabla. Cuadro de resumen parapolítica en el Senado, porcentaje de votos y curules involucradas

CUADRO RESUMEN PARAPOLÍTICA EN EL SENADO, PORCENTAJE DE VOTOS Y CURULES INVOLUCRADAS

PARTIDO	VOTOS OBTENIDOS	VOTOS INVOLUCRADOS	PORCENTAJE VOTOS INVOLUCRADOS	CURULES OBTENIDAS	CURULES INVOLUCRADAS*
COALICIÓN DE GOBIERNO					
U	1,591,775	427.918	26.88%	20	9
Conservador	1,470,029	207.107	14.08%	18	4
Cambio Radical	1,211,457	382.781	31.59%	15	9
Convergencia Ciudadana	566,823	290.162	51.19%	7	5
Alas Equipo Colombia	418,124	168.620	34.98%	5	2
Colombia Democrática	272,524	176.955	64.93%	3	3
Colombia Viva	229,556	162.205	70.66%	2	2
SUB TOTAL	5.760.288	1.815.748	31.52%	70	34
OPOSICIÓN DE GOBIERNO					
Liberal	1,436,657	279.994	19.48%	18	4
SUB TOTAL	1.436.657	279.994	19.48%	18	4
PARTIDOS NO INVOLUCRADOS					
Polo Democrático	875,451	0	0	10	0
Movimiento Mira	237,512	0	0	2	0
Otros Partidos que no Alcanzaron Umbral	598.304	0	0	0	0
Votos en Blanco	291,864	0	0	0	0
SUB TOTAL	2.003.131	0	0	0	0
TOTAL	9.200.076	2.097.742	21.82%	100*	37

*Hay 43 senadores y 38 curules involucradas, se debe a que en una curul se ha visto involucrado su ocupante inicial y uno o dos de sus reemplazos.
*Total de curules: no incluye minorías, negritudes, indígenas.

(Indepaz 2012, pág. 5)

Anexo 9. Tabla. Cuadro de resumen parapolítica en la Cámara de Representantes involucrados por partido

CUADRO RESUMEN PARAPOLÍTICA EN LA CAMARA DE REPRESENTANTES, INVOLUCRADOS POR PARTIDO

PARTIDO POLITICO	INVESTIGADOS	DETENIDOS	TOTAL
Alas Equipo Colombia	0	1	1
Apertura Liberal	3	2	5
Cambio Radical	1	3	4
Colombia Democrática	0	2	2
Conservador	2	3	5
Convergencia Ciudadana	0	2	2
Huila Nuevo y Liberalismo	1	0	1
Liberal	3	5	8
Movimiento moral	0	2	2
Movimiento Nacional Progresista	1	0	1
Participación Popular	1	0	1
Partido de Acción Social	1	0	1
U	2	4	6
TOTAL	15	24	39

(Indepaz 2012, pág. 10)

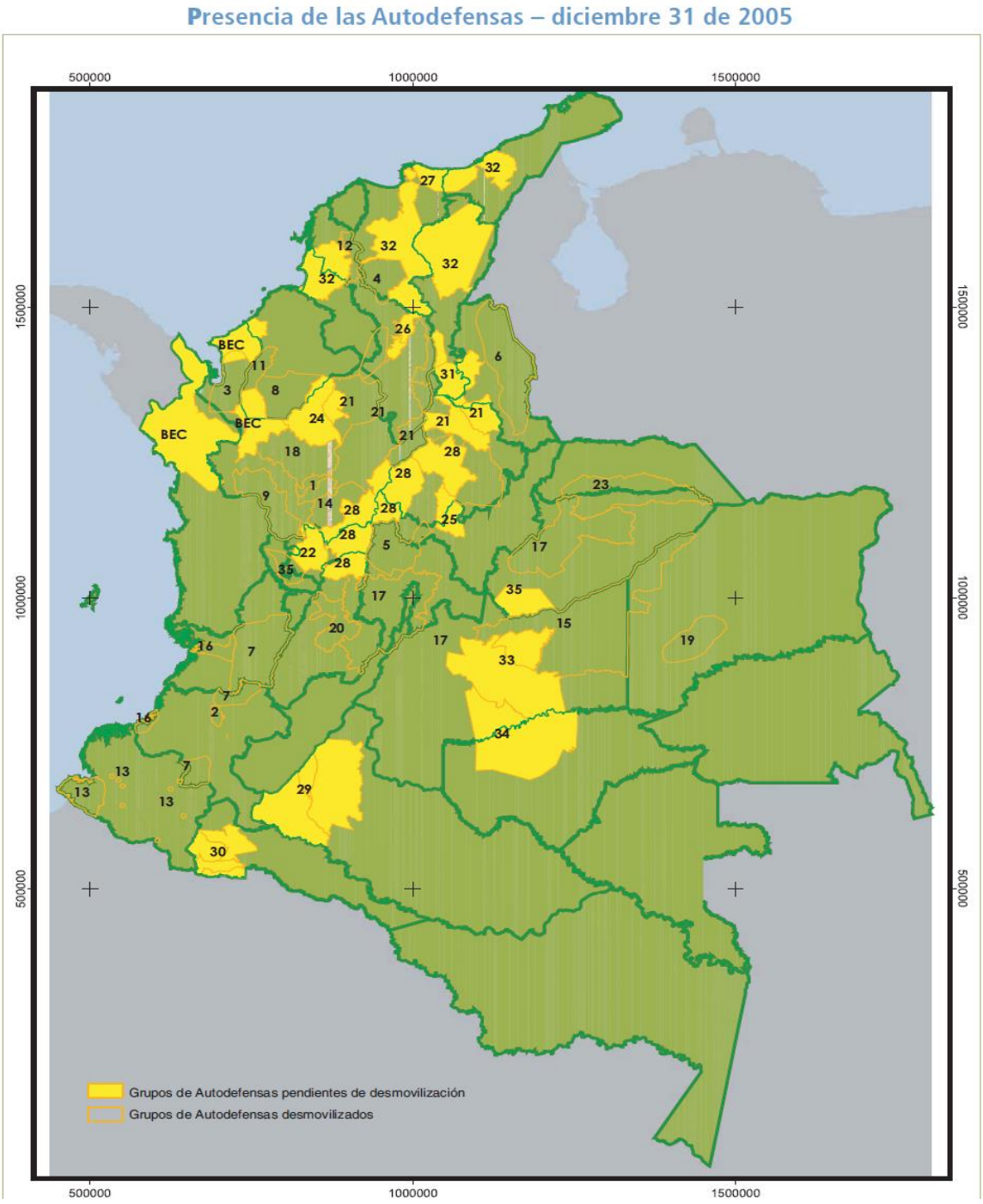
Anexo 10. Tabla. Número de procesos por parapolítica discriminados por departamento

Tabla 2: Procesos abiertos por parapolítica, por departamento

PROCESOS ABIERTOS POR PARAPOLÍTICA POR DEPARTAMENTO*					
No.	**Departamento**	**Fiscalía General de la Nación**	**Corte Suprema de Justicia**	**TOTALES**	
1	Antioquia	20	6	26	7%
2	Atlántico	39	2	41	11%
3	Bolívar	8	2	10	3%
4	Boyacá	28	0	28	7%
5	Caldas	7	1	8	2%
6	Caquetá	2	0	2	1%
7	Casanare	18	0	18	5%
8	Cauca	8	1	9	2%
9	Cesar	19	2	21	6%
10	Córdoba	22	5	27	7%
11	Cundinamarca	19	1	20	5%
	Guainía	0	1	1	0%
12	Chocó	9	0	9	2%
13	Guajira	3	1	4	1%
14	Guaviare	2	0	2	1%
15	Magdalena	38	4	42	11%
16	Meta	8	0	8	2%
17	Nariño	3	2	5	1%
18	Norte de Santander	6	4	10	3%
19	Putumayo	2	1	3	1%
20	Risaralda	1	1	2	1%
21	Santander	13	2	15	4%
22	Sucre	21	3	24	6%
23	Tolima	33	4	37	10%
24	Valle	4	3	7	2%
25	Vichada	1	0	1	0%
	TOTALES	334	46	380	100%

(López 2008, pág. 72)

Anexo 11. Mapa. Presencia de los paramilitares en las regiones colombianas. 31 de diciembre de 2005



(Oficina Alto Comisionado para la Paz 2006, pág. 66)

Anexo 12. Lista. Paramilitares extraditados a EEUU (2008-2010)

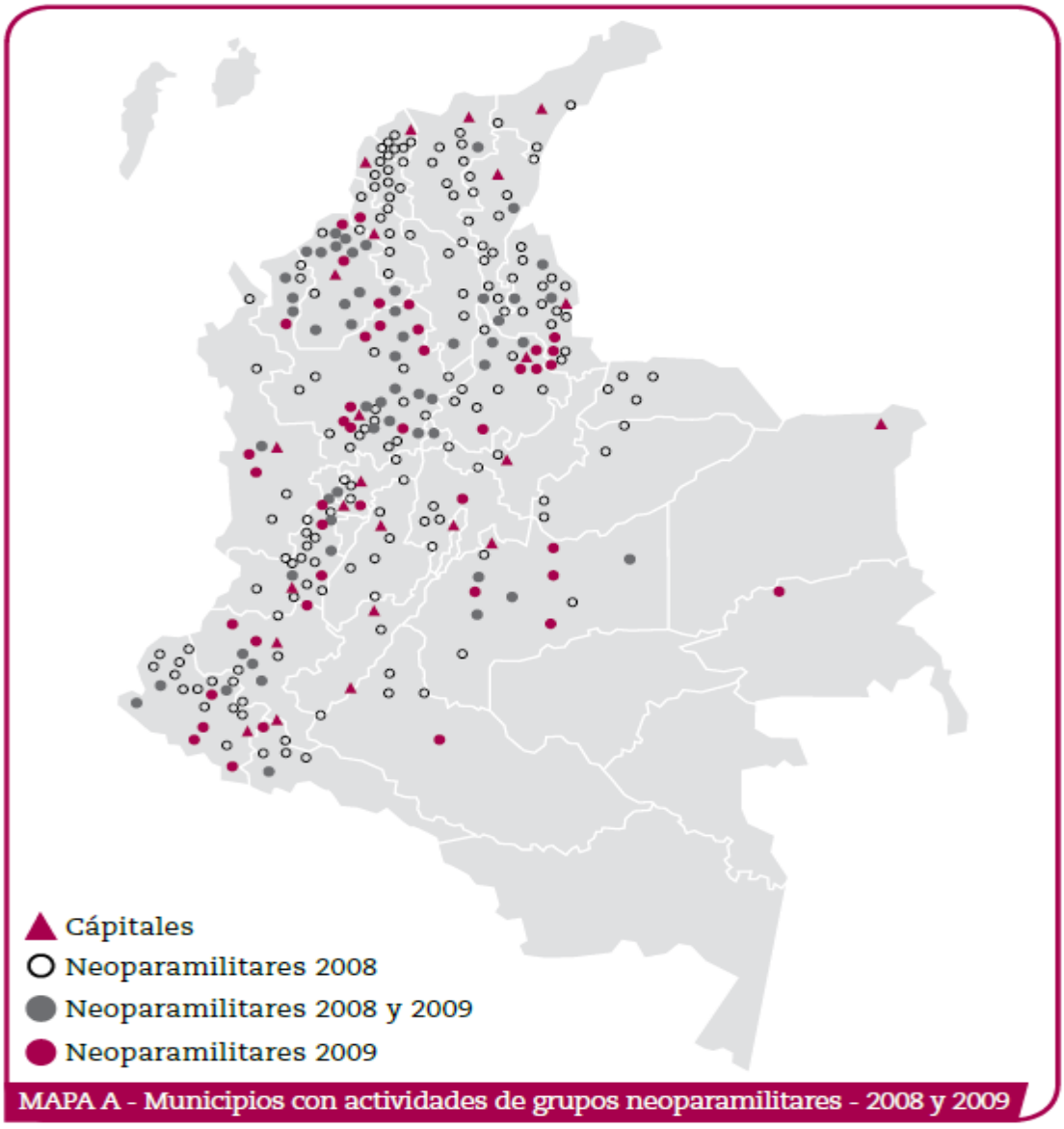
LISTADO DE JEFES PARAMILITARES EXTRADITADOS A ESTADOS UNIDOS

1. Carlos Mario Jiménez , alias "Macaco" (7.5.08) ***Bloque Central Bolívar***
2. Diego Alberto Ruíz Arroyave, alias "El Primo" (13.05.08) ***Bloque Centauros***
3. Diego Fernando Murillo Bejarano, alias "Don Berna" (13.05.08) ***Bloque Cacique Nutibara***
4. Eduardo Enrique Vengoechea Mola, alias "El Flaco" (13.05.08) ***Frente Resistencia Tayrona***
5. Edwin Mauricio Gómez Luna, alias "Mello Pobre" (13.05.08) ***Frente Resistencia Tayrona***
6. Franciso Javier Zulaga Lindo, alias "Gordo Lindo" (13.05.08) ***Bloque Pacífico***
7. Hernán Giraldo Sierra, alias "El Patrón" o "El Taladro" (13.05.08) ***Frente Resistencia Tayrona***
8. Juan Carlos Sierra Ramírez, alias "El Tuso" (13.05.08) ***Bloque Héroes de Granada***
9. Manuel Enrique Torregrosa Castro, alias "El Chan" (13.05.08) ***Bloque Norte***
10. Martín Peñarada Osorio, alias "El Burro" (13.05.08) ***Frente Resistencia Tayrona***
11. Nodier Giraldo Giraldo (13.05.08) ***Frente Resistencia Tayrona***
12. Ramiro Vanoy Murillo, alias "Cuco Vanoy" (13.05.08) ***Bloque Mineros***
13. Rodrigo Tovar Pupo, alias "Jorge 40" (13.05.08) ***Bloque Norte***
14. Salvatore Mancuso Gómez, alias "El Mono Mancuso", "Tiple Cero", "Santander Lozada" (13.05.08) ***Bloque Catatumbo***
15. Guillermo Pérez Alzate, alias "Pablo Sevillano" (13.05.08) ***Bloque Central Bolivar***
16. Jaime Arturo Gamez Moreno, alias "Jimmy" (1.09.08) ***Bloque Frente Mártires de Guática, Bloque Central Bolivar***
17. Miguel Villarreal Archila, alias "Salomó" o "El Flaco" (1.09.08) ***Bloque Norte***
18. José Gregorio Terán Vásquez, alias "El Pipon" (20.11.08) ***Bloque Norte de las ACCU***
19. Luis Carlos Ropero Díaz, alias "Santos" (3.12.08) ***Bloque Catatumbo de las ACCU***
20. Miguel Angel Mejía Muñera, alias "El Mellizo", "Pablo Arauca", o "El Loco" (4.03.09) ***Bloque Vencedores Arauca***
21. Herbert Veloz García, alias "HH" (5.03.09) ***Bloque Bananero y Calima***
22. Gerardo Gelves Castro, alias "Diomedes" (24.03.09)
23. Norberto Quiroga Poveda, alias "Cinco Cinco", "Beto", o "Beto Quiroga" (18.05.09) ***Frente Resistencia Tayrona***
24. Éder Pedraza Peña, alias "Ramón Mojana" (la Corte Suprema de Justicia le dio concepto favorable de extradición en agosto 2010 y fue extraditado noviembre 2010) ***Bloque Mojana***

Referencia: Nombre, alias (fecha de extradición), bloque.

(Memoria y Dignidad, 2010)

Anexo 13. Mapa. Municipios con actividades de Bacrim, 2008 y 2009



MAPA A - Municipios con actividades de grupos neoparamilitares - 2008 y 2009

Fuente: Mapa elaborado con base en la información de la base de datos del Observatorio del Conflicto Armado, CNAI.

(Romero y Arias 2010, pág. 42)

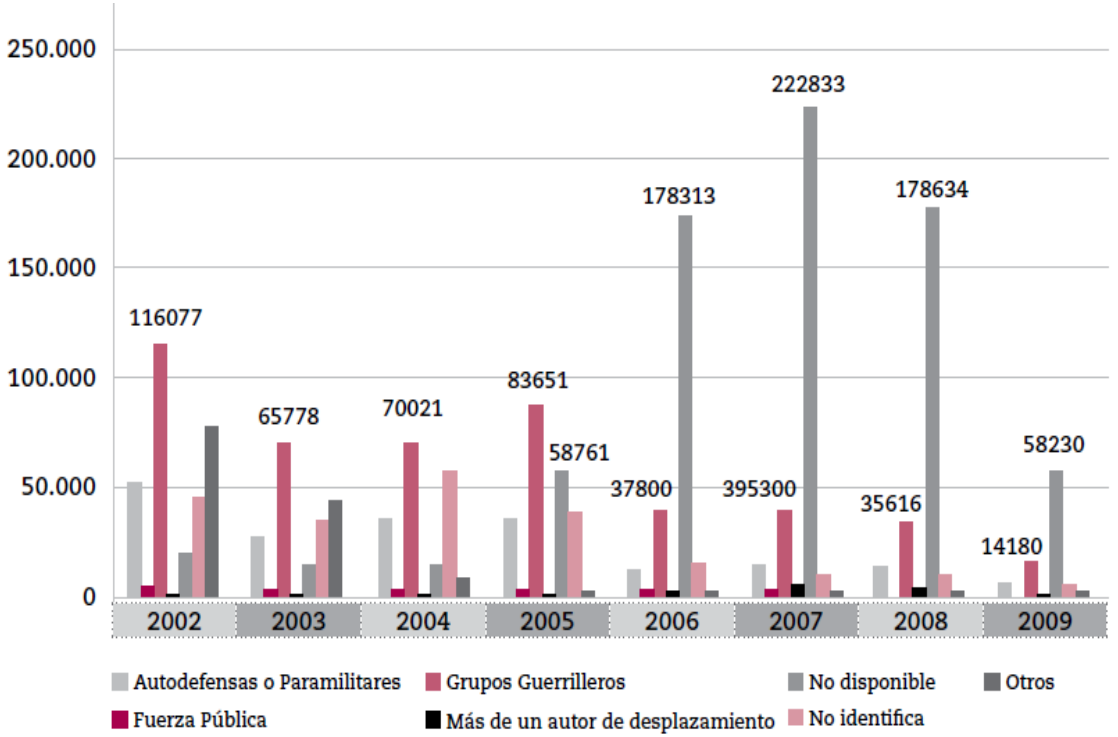
Anexo 14. Tabla. Municipios con presencia y actividades de Bacrim por departamento y subregión (2009-2010)

Subregión	Departamento	Número municipios 2009	Número municipios 2009-2010	Número municipios 2010	Total municipios
Antioquia y Eje Cafetero	Antioquia	21	12	16	49
	Caldas	1	0	0	1
	Risaralda	2	0	0	2
Subtotal		24	12	16	52
Costa Caribe	Atlántico	2	1	0	3
	Bolívar	2	2	3	7
	Cesar	2	3	4	9
	Córdoba	6	12	4	22
	La Guajira	0	2	3	5
	Magdalena	1	2	2	5
	Sucre	2	2	3	7
Subtotal		15	24	19	58
Llanos Orientales	Arauca	0	0	0	0
	Casanare	1	0	1	2
	Caquetá	1	0	0	1
	Meta	6	4	1	11
	Vichada	0	0	1	1
	Guaviare	0	0	1	1
Subtotal		8	4	4	16
Santanderes	Santander N.	3	6	4	13
	Santander	4	6	8	18
Subtotal		7	12	12	31
Pacífico y Putumayo	Cauca	6	4	2	12
	Chocó	4	1	2	7
	Nariño	5	7	4	16
	Putumayo	2	1	1	4
	Valle	7	4	2	13
Subtotal		24	17	11	52
Centro	Bogotá	0	1	0	1
	Boyacá	1	1	1	3
	Cundinamarca	2	0	4	6
	Huila	0	1	3	4
	Tolima	2	0	0	2
Subtotal		5	3	8	16
Otros	Guainía	1	0	0	1
Subtotal		1	0	0	1
TOTAL		84	72	70	226

(Romero y Arias 2011, pág. 12)

Anexo 15. Gráfico. Desplazamiento individual por actores, 2002-2009

Gráfica 3. Desplazamiento individual por autores 2002-2009 (septiembre)
Fuentes: Estadistica de desplazamiento
En *http://www.accionsocial.gov.co*
Datos procesados por el odservatorio del conflicto armado, CNAI.



(Romero y Arias 2010, pág. 40)

Como puede notarse, desde el año 2006 los causantes de los desplazamientos en mayor medida son denominados como "No disponible", puesto que las autoridades no tienen información precisa al respecto. Para Romero y Arias (2008) esto se debe a que, a partir de la desmovilización de los paramilitares, no es clara la identificación de los grupos sobrevinientes (pág. 44)

Anexo 16. Tabla. Número de líderes de DDHH asesinados entre 2007 y agosto de 2011. Clasificación por subregión

Cuadro 5. Número de líderes de Derechos Humanos asesinados entre 2007 y agosto de 2011, clasificados por subregión

Subregión	Departamento	Número de víctimas	Subregión	Departamento	Número de víctimas
Antioquia y Eje Cafetero	Antioquia	36	Santanderes	Norte Santander	3
	Caldas	1		Santander	2
	Risaralda	2	Subtotal		5
	Quindío	1	Pacífico y Putumayo	Cauca	11
Subtotal		40		Chocó	3
Costa Caribe	Atlántico	2		Nariño	6
	Bolívar	9		Putumayo	1
	Córdoba	6		Valle	18
	La Guajira	3	Subtotal		39
	Magdalena	1	Centro	Bogotá	3
	Sucre	5		Huila	1
Subtotal		26		Tolima	4
Llanos Orientales	Arauca	2	Subtotal		8
	Caquetá	2	Sin identificar		1
	Meta	3	Subtotal		1
Subtotal		7	TOTAL		126

(Arias 2012, pág. 15)

Anexo 17. Tabla. Número de indígenas asesinados entre 2007 y agosto de 2011

Cuadro 6. Número de indígenas asesinados entre 2007 y agosto de 2011

Subregión	Departamento	Número de víctimas	Subregión	Departamento	Número de víctimas
Antioquia y Eje Cafetero	Antioquia	24	Pacífico y Putumayo	Cauca	76
	Caldas	8		Chocó	8
	Risaralda	7		Nariño	110
Subtotal		39		Putumayo	3
Costa Caribe	Cesar	11		Valle	9
	Córdoba	54	Subtotal		206
	La Guajira	32	Centro	Huila	1
	Sucre	2		Tolima	1
Subtotal		99	Subtotal		2
Llanos Orientales	Arauca	21	Otros	Guaviare	5
	Caquetá	1		Vaupés	3
	Meta	4	Subtotal		8
Subtotal		26	TOTAL		380

(Arias 2012, pág. 16)

Anexo 18. Imágenes. Recortes periodísticos nexos Bacrim-políticos

JUDICIAL 2 JUN 2013 - 6:10 AM

El objetivo: blindar las elecciones de 2014

Se abre capítulo bacrimpolítica

La Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía tomaron la decisión de indagar hasta dónde el poder político en las regiones apoya la expansión de las bandas criminales.

Por: María del Rosario Arrázola

705
Compartido



(El Espectador 2013)



Bandas salpican a 208 funcionarios

Los departamentos más afectados por la bacrim-política son Antioquia, Chocó y Valle, según la Fiscalía.

Por NELSON MATTA COLORADO | Publicado el 3 de noviembre de 2013

(El Colombiano 2013)



(RCN Noticias, 2013)



(El País 2011)